

En medio del coronavirus



**EL GOBIERNO PAGÓ
U\$D 320 MILLONES
ALFMI**

**¡PLATA PARA SALUD
Y LA EMERGENCIA YA!**



A la salida de esta edición se está en el día 54 de la cuarentena. El gobierno de Alberto Fernández la acaba de prorrogar hasta el 25 de mayo, pero ya la flexibilización es enorme, aunque se la quiera encubrir simulando una polémica con los empresarios. El gobierno apela a su consabido doble discurso diciendo que “si seguía sus recomendaciones habría miles de muertos”. Mientras por otro lado, junto a Larreta, Kicillof, los gobernadores e intendentes de todos los colores políticos, permite la reapertura de cientos de fábricas haciéndose eco de esos mismos grandes empresarios a los que solo les interesan sus propias ganancias. Volvemos a alertar sobre esto ya que no hay ningún fundamento sanitario para esta reapertura, atento a que los contagios se hacen sentir en los geriátricos, las villas de emergencia y ya está planteada la posible expansión cuando llegue el pico. El Hospital Italiano de Córdoba, por ejemplo, tuvo que ser evacuado ante masivos contagios, lo mismo sucedió con hogares de ancianos.

Denunciamos que los empresarios, lejos de actuar de una manera “responsable y solidaria” como simulan, están aprovechando la pandemia para descargar la mayor crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador de la mano de los dirigentes traidores de la CGT y con el aval explícito del gobierno. El pacto de todos estos actores tiene una clara consecuencia: un ajuste salarial de 25% a pesar del beneficio del que gozan grandes empresas y multinacionales con el pago por parte del Estado del 50% de los salarios. Sin embargo, siguen los despidos, las suspensiones y hay nuevos ataques a los derechos laborales. Es decir, se está usando la pandemia para atacar al pueblo trabajador y salvar las ganancias empresariales. A tal punto que el propio Alberto Fernández justificó el recorte salarial diciendo que no es un problema “porque en cuarentena se gasta menos” (entrevista con Alejandro Bercovich en Radio con Vos, miércoles 6 de mayo).

Otro tema relevante en estos días es que el gobierno pagó 320 millones de dólares de intereses de la fraudulenta deuda externa al Fondo Monetario Internacional. Denunciamos que se le pague a los buitres usureros. Porque precisamente, como venimos sosteniendo desde la izquierda, esos fondos deben ir a combatir el coronavirus,

a los hospitales, a los trabajadores de la salud y a los más vulnerables, no a los usureros internacionales. Otra vez vemos el doble discurso oficial. Mientras el gobierno dice “no nos van a doblegar” en medio de la renegociación de la deuda, dispone un pago millonario al FMI. Ese dinero es el equivalente a tres millones de asignaciones de 10.000 pesos para todos aquellos que no las recibieron porque decían que “no calificaban”. El gobierno dispuso este pago justo cuando el propio presidente reconoció que no se le habían abonado los 5.000 pesos de plus salarial que se les prometió a los trabajadores

y volcar esos fondos a la emergencia. Esta medida, sumada al no pago de la deuda externa, posibilitaría financiar inmediatamente un fondo de emergencia para asistir a los más necesitados. No puede ser que los grandes capitalistas hagan ostentación de sus fortunas o los bancos sigan ganando millonadas y no se les graven sus riquezas, fortunas y ganancias.

Al no tomarse medidas de fondo, la necesidad obliga a que miles de trabajadores sean empujados a romper la cuarentena para reclamar. La lista de luchas crece. Acaba de ocuparse por sus

trabajadores la textil Sedamil en Trelew, Chubut. Los mineros de Andacollo de Neuquén siguen exigiendo el pago de sus salarios y muchos docentes de esa provincia reclaman lo mismo. Los trabajadores de FATE (Sutna) se movilizaron al Ministerio de Trabajo e hicieron una asamblea con la debida distancia sanitaria contra el recorte salarial. Los municipales de Córdoba son atacados por el intendente peronista Llaryora (Schiaretti). Ademys, residentes de salud y estatales repudiaron en las calles a la ley de ajuste de Larreta-Macri. Hubo paro de repartidores, marcha de los obreros de Penta, textiles de La Matanza, movilización de despedidos y

Fondo de Emergencia ya ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!



de la salud desde hace más de un mes.

Pagar vencimientos de una deuda usurera y de avanzar en una renegociación de una deuda de la que el pueblo nunca vio un peso, para seguir pagando durante los años venideros, no es ni más ni menos que reconocer las barbaridades que se hicieron en el gobierno de Macri, de endeudar al pueblo trabajador por décadas. Por eso la política de cumplir con los bonistas (usureros profesionales) cuenta con el aval de los grandes empresarios, la Sociedad Rural, Cambiemos, el FMI, el Papa y los gobiernos capitalistas del Primer Mundo.

Con respecto al debate de si gravar a la riqueza o no, siguen los devaneos (ver nota ¿Y el impuesto a la riqueza? en esta edición digital). Todavía el gobierno no presentó ningún proyecto a tal fin, a pesar de que lo anunció hace más de un mes. Seguimos exigiendo que deje de darle vueltas y lo imponga de una vez. Porque la única realidad es que al día de hoy solo existe el proyecto del Frente de Izquierda, que permitiría recaudar 20.000 millones de dólares

precarizados de distintos lugares de trabajo en La Plata, corte contra las suspensiones y reducción de salarios en la multinacional yanqui Mondelez, paro de UTA en Córdoba y otros lugares, entre otros reclamos. Luchas de las cuales somos parte y apoyamos desde el sindicalismo combativo e Izquierda Socialista, a la vez que denunciamos los actos represivos como ocurrió contra los municipales de Jesús María y organizaciones combativas de desocupados.

Llamamos a los trabajadores y demás sectores populares a seguir enfrentando las rebajas salariales, las suspensiones y los ataques patronales avalados por la repudiable burocracia sindical y el gobierno y a luchar por una salida de fondo. Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad vamos a seguir impulsando el fondo de emergencia sobre la base de un impuesto especial a las grandes fortunas, ganancias de los grupos económicos, bancos y multinacionales y el no pago de toda la deuda externa para que esa plata vaya a combatir el coronavirus y a la emergencia, para que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador.

Frente de Todos: ¿Y el impuesto a la riqueza?



Escribe **Juan Carlos Giordano**
Diputado electo Izquierda Socialista / FIT Unidad

A más de un mes de anunciado, el famoso proyecto del impuesto a la riqueza de los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller, del Frente de Todos, todavía no vio la luz. El único proyecto que existe para gravar a los ricos, grandes empresarios, bancos, multinacionales y terratenientes para recaudar 20.000 millones de dólares y combatir la mayor crisis del coronavirus es el del Frente de Izquierda Unidad.

El impuesto es una necesidad imperiosa. ¿Cómo puede ser que en medio de la pandemia las ganancias y acciones de los grandes capitalistas sigan creciendo y no se las toque? El Grupo Mercado Libre, de Marcos Galperín, tuvo un crecimiento de sus acciones en las últimas horas de 6.000 millones de dólares. Y el valor de mercado de la firma asciende a 37.290 millones de dólares, casi el 10% del producto bruto interno (PBI) argentino, es decir, de toda la riqueza anual que generan millones de trabajadores. “Seguimos comprometidos en empoderar a nuestros comerciantes para que continúen operando y asegurando las entregas de bienes que necesitan los hogares. Mercado Libre tiene la oportunidad de salir de esta situación más fuerte”, dice el grupo en un comunicado.

Galperín es uno de los cincuenta millonarios de la Argentina, dato que todos los años publica la revista internacional Forbes. El dueño de Mercado Libre es a su vez integrante de la crema de grandes magnates nucleados en AEA (Asociación Empresaria Argentina) junto a Arcor, Perez Companc, Irsa, Fiat, Techint, Globant, entre otros.

Otro tanto se podría decir del dueño de FATE, Madanes Quintanilla (también dueño del Grupo Aluar y otras



empresas), quien acaba de rebajar 50% la quincena de sus 1.600 obreros y amenaza con la rebaja de 25% en caso de volver a producir. El dueño de FATE también está entre los cincuenta millonarios del país, a quien se le debería aplicar el impuesto, igual que a los bancos, las multinacionales y las ganancias empresariales, pero hasta ahora el gobierno no los ha tocado.

Hablando siempre de impuestos, hay que agregar que el 60% de Ganancias lo pagan los trabajadores, y ue el IVA (el impuesto que más recauda) es el más impopular e injusto, ya que el 21% lo paga igual un Paolo Rocca, de Techint, que un desocupado. Conclusión: la mayor recaudación impositiva la aporta el pueblo y los de arriba quedan en una completa impunidad.

Dicen que el proyecto oficial “estaría listo”, pero volvemos a repetir, ni siquiera fue presentado. Según versiones, lo harían en estos días. Sería para recaudar entre 3.500 y 4.000 millones de dólares y estaría destinado para salud. Si fuera así, sería insuficiente (representa solo un 30% de lo que el gobierno dispuso desde la pandemia), pero igual decimos que lo apliquen ya. Sin embargo, se demora peligrosamente. Incluso hay una versión de que Heller lo retoca permanentemente y que hay un reclamo de los empresarios para que sea a cuenta del futuro pago del impuesto a las ganancias, o sea que lo que se les cobraría por un lado se les devolvería por otro. Si así fuera sería una auténtica burla.

Los devaneos “parlamentarios” son impresionantes.

Cristina pidió previamente un fallo de la Corte, después si se iba a reunir el Congreso de manera virtual o presencial, y ahora se sabe que, si sesiona por primera vez, el proyecto no se trataría porque, en caso de ser presentado, pasaría a comisiones varias semanas. Otros sectores hablan de que sería “confiscatorio”, o que viola la “propiedad privada”, y que si sale se va a empantamar en los enredos judiciales, porque sería apelado. O sea, se sigue dilatando una medida ultra urgente.

Dicen que debe pasar por el Congreso, pero le acaban de robar un 25% del salario a millones de trabajadores en una mesa en Olivos entre la UIA, la CGT y el gobierno. ¿O no se violó en este caso la “propiedad privada” de la retribución salarial con que cuenta un trabajador para su sustento?

Lo mismo podríamos decir del pacto mafioso de Macri con el FMI. Fue firmado a espaldas del pueblo y se va a reconocer, renegociar y pagar sin grandes dilaciones. Ahora, cuando se trata de imponerles un impuesto a los de arriba le dan mil vueltas, sabiendo además que no hay que tener ninguna expectativa en un Congreso que siempre vota leyes contra los trabajadores y los jubilados.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad llamamos a los sectores obreros y populares a seguir reclamando por lo suyo y a la vez a unirnos para reclamar un fuerte impuesto progresivo a los de arriba, para que la crisis la paguen ellos, no los trabajadores.

Barril “criollo”, más ganancias para las multinacionales petroleras

Escribe **Claudio Funes**

Ante el desplome mundial del precio del crudo, los ministros de Economía, primero, y luego los gobernadores de Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego acordaron pedirle al gobierno nacional la restauración del barril “criollo” para beneficiar a las multinacionales petroleras. En vez de exigir que bajen los precios de los combustibles para favorecer al pueblo trabajador.

Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, utilizando nuevamente la excusa de evitar despidos, les garantizará a los pulpos saqueadores un “valor de referencia”. Se especula que rondará los 45 dólares el barril. Si eso se confirma, la diferencia con el precio de mercado sería importante, ya que la cotización del barril Brent (denominación del precio de referencia en Europa) para contratos a julio es de 31 dólares. Como vemos, petroleras como Exxon, Shell, Vista Oil & Gas, Chevron, Pluspetrol y otras siempre hacen negocios.

El barril “criollo” se suma al programa ATP. Las



multinacionales están recibiendo un multimillonario beneficio. El Estado, a través de la Anses, se hace cargo del 50% del salario del trabajador suspendido.

Estos pulpos son premiados por el gobierno de Alberto Fernández y ayudados por la burocracia sindical. Gracias al secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, el eterno burócrata Guillermo Pereyra, pudieron imponer suspensiones masivas

y rebaja salarial. Más de 32.000 trabajadores petroleros pasaron a cobrar un promedio del 30% de sus ingresos habituales.

Pero si ya era mala, la situación de los trabajadores sigue empeorando. Durante los primeros días de mayo, empresas de servicios petroleros como Schlumberger (la más grande del mundo), Pecom, San Antonio International, Halliburton y Weatherford que durante el año 2019, en conjunto, facturaron más de 100.000 millones de pesos anunciaron miles de despidos.

Por lo que describimos más arriba es el Estado el que objetivamente está financiando la industria petrolera privada para que nos siga robando nuestra riqueza.

Desde Izquierda Socialista reclamamos que se terminen las suspensiones, los despidos y la rebaja salarial. Además, exigimos que se termine con este saqueo de las multinacionales: por una YPF 100% estatal y la estatización del conjunto de la industria petrolera bajo control de sus trabajadores.

Hotel Castelar: cierra un símbolo porteño y despide a sus empleados

En medio de la cuarentena y de un decreto presidencial que “prohíbe despidos y suspensiones”, los dueños del hotel Castelar decidieron el cierre de un auténtico patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, despidiendo a la vez a sus más de sesenta empleados.

Escribe **Adolfo Santos**

Intempestivamente, la empresa Casel S.A. anunció el cierre del histórico hotel Castelar, situado en la tradicional Avenida de Mayo. Fue inaugurado en 1929 y se convirtió en una referencia cultural de la ciudad. El edificio fue diseñado por el famoso arquitecto italiano Mario Palanti, artífice del cercano Palacio Barolo y su “mellizo” Palacio Salvo, de Montevideo. El hotel, de 55 metros, era uno de los edificios más altos de la Avenida de Mayo al momento de su construcción. Fue el primero de la ciudad en tener un comedor con refrigeración y un spa. Albergó representantes de la política, la cultura y el espectáculo. Uno de sus ilustres huéspedes fue Federico García Lorca, quien se alojó desde octubre de 1933 hasta marzo de 1934 en la habitación 704, hoy convertida en museo para homenajear al gran poeta granadino.

Casel S.A., dueña del hotel, en una comunicación vía WhatsApp les ofreció a sus trabajadores un “retiro voluntario” por el 35% del monto que les corresponde. Es llamativo que, paralelamente, la familia Piccaluga Mayorga, descendiente de los fundadores del establecimiento, haya solicitado la apertura de un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, que supone



entablar una negociación con representantes de los trabajadores y el propio ministerio, lo que no aconteció. Además, los empleados declararon que antes de la cuarentena el hotel estaba trabajando con un 80% de su capacidad, algo que inhibiría el pedido de “procedimiento preventivo”.

Es inaceptable esta medida cuando, para paliar la crisis, el gobierno ha beneficiado a las empresas con significativas reducciones sobre las contribuciones patronales. Además, cuentan con el programa de asignación compensatoria al salario para empresas de hasta cien empleados, o los Repro, que incluyen prestaciones desde el Estado para cubrir parte del sueldo. Hay denuncias en el sentido de que la empresa habría accedido a esos préstamos para liquidar los salarios, que después no pagó. Todavía adeuda parte de los sueldos de marzo y el mes de abril.

Sin duda se trata de una maniobra de la patronal buscando sacar provecho de la crisis generada por la pandemia para mantener sus ganancias. Casel S.A. estaría proyectando un nuevo tipo de

negocio para lo cual necesitaría desvincularse del actual personal. Pero cualquiera sea la razón, rechazamos estos despidos masivos. Los trabajadores, que no están dispuestos a perder sus puestos, deben exigir la intervención urgente del gobierno nacional en el conflicto. Si la millonaria familia Piccaluga Mayorga dice que no está en condiciones de continuar con el hotel, el Estado se debe hacer cargo de esa importante fuente de trabajo bajo control de sus trabajadores.

En marzo de 1934, luego de alojarse en el Castelar, el gran poeta García Lorca regresó a su país. Dos años después, en agosto de 1936, fue detenido y fusilado por un batallón franquista por luchar en favor de la República. El mejor homenaje que los trabajadores del hotel Castelar pueden rendir a su huésped más ilustre será organizar la pelea en defensa de sus puestos de trabajo y por la reapertura del hotel. Estaremos junto a ellos para evitar que, una vez más, se pretenda descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.

DEUDA EXTERNA

Renegociar es reconocer la deuda usuraria y pagarla

Escribe **José Castillo**

Pasada la fecha del 8 de mayo, autoimpuesta por el gobierno para el “cierre” de la renegociación de la deuda, tal como se esperaba, todo se pospuso hasta el viernes 22. Seguirá en estos días la partida de póker de mentirosos, entre un gobierno que dice “para la tribuna” que no pagará nada a costa del pueblo, mientras por detrás guiña el ojo y le dice a los buitres acreedores que presenten una contrapropuesta, y los propios fondos que, con toda la experiencia del establishment internacional, aceptan el juego y también sostienen para afuera que “la propuesta es inaceptable”, a la vez que se disponen a contraofertar y así seguir el juego con la seguridad de que al final serán los que saldrán ganando.

En medio de tantas idas y venidas es lógico que surjan dudas que recogemos entre nuestros compañeros de trabajo, de estudio, amigos, vecinos y familiares. Hay una enorme confusión acerca de qué es “renegociar la deuda”. ¿Se trata acaso de “dejar de pagar”? ¿Es una especie de moratoria (decisión unilateral de un país de no abonar por una serie de años)?

Nada de eso. Digámoslo con todas las letras, renegociar es pagar. “No queremos caer en default”, “nuestro objetivo es tener un esquema que nos permita cumplir con los acreedores”, son frases textuales del ministro Guzmán y del propio presidente Fernández. Por eso, pongamos orden en tanto palabrerío. Todos están por pagar, Alberto Fernández, Macri, los empresarios, la Sociedad Rural, la CGT. También, por supuesto, todos aquellos visitados por Alberto en busca de apoyo: Merkel, Macron, el papa Francisco. Y, obviamente, aunque increíblemente se busque ahora disfrazarlo de “progresista”, el FMI.

De acá sacamos entonces una primera conclusión: la izquierda y el sindicalismo combativo somos los únicos que estamos en contra de la “renegociación”, simple y claramente, porque insistimos en que no hay ninguna salida si seguimos pagando la deuda, el objetivo explícito de toda la negociación.

“Renegociar” implica, previamente, reconocer como legítima a la deuda y sus acreedores. ¡Eso es lo que está haciendo el gobierno de los Fernández! Reconoce la deuda de Macri después de haber dicho una y mil veces que solo sirvió para aceitar la bicicleta financiera. Pero además está reconociendo toda la deuda anterior (aceptando de paso, aunque no lo diga, que era mentira que “nos habíamos desendeudado”, como afirmaba mentirosamente el kirchnerismo). Ahí están, como mudos testigos, los bonos de los



canjes de Néstor y Cristina de 2005 y 2010, metidos también en la actual renegociación. Y, por sobre todo, y nunca nos olvidemos, se está reconociendo una vez más la totalidad de una deuda cuyo origen está en la genocida dictadura militar, inmoral, ilegal, ilegítima y fraudulenta, tal como lo estableció la propia Justicia en el año 2000 con el fallo del juez Ballesteros.

Va entonces la segunda conclusión. Nosotros, la izquierda, seguimos siendo los que, coherentes con nuestra denuncia de ese carácter del endeudamiento, nos negamos a reconocerla y por eso también exigimos dejar inmediatamente de pagarla.

“Renegociar” no es “resolver definitivamente” el drama del endeudamiento argentino. Lo que hoy se está discutiendo con los acreedores son 66.000 millones de dólares. Es apenas una porción de los 330.000 que debe el Estado nacional y menos aún de los casi 400.000 millones de dólares si le sumamos las deudas provinciales y la del Banco Central. Cualquier arreglo con los pulpos acreedores, hoy sentados a la mesa de negociación (que, insistimos, no le saldrá para nada gratis a nuestro país), dejará pendiente a los que siguen en la fila: los bonistas con legislación local, ¡el FMI!, que vendrá por sus 49.000 millones, y un sinfín de letras y bonos repartidos en manos de diversos grupos de

pulpos acreedores.

Insistimos, y es nuestra tercera conclusión. Decimos que no hay que pagar no por tozudez, o por decir cosas “utópicas”. La utopía reaccionaria es la de aquellos que sostienen que hay alguna salida pagando y que mienten sosteniendo que así se resuelve el problema de la deuda.

Toda la experiencia histórica, nacional e internacional, nos da la razón. Nunca hubo una renegociación de la que saliéramos ganando. Limitando nuestro análisis a la deuda actual generada por la dictadura, el primer “canje” lo hizo Menem en 1993. Fue el llamado “Plan Brady”, nos quedamos sin ferrocarriles, teléfonos, gas ni petróleo mientras la deuda siguió creciendo. Luego tuvimos el “megacanje” de De la Rúa que solo sirvió para aumentar el monto de endeudamiento en 50.000 millones de dólares. Por último, estuvieron los canjes kirchneristas de 2005 y 2010. A contramano del doble discurso del “desendeudamiento”, los Kirchner llegaron al poder debiendo 190.000 millones de dólares, pagaron durante sus mandatos 200.000 y cuando dejaron el gobierno en 2015 debíamos 240.000. Estos ejemplos, o los internacionales, como los casos cercanos de Grecia y Portugal, nos demuestran que ninguna renegociación sirvió a los pueblos para librarse del mal de la deuda externa, solo terminaron trayendo más ajuste y saqueo.

Cuarta y última conclusión: se puede, y se debe, no pagar la deuda externa. Se puede, como lo demuestran los más de 250 casos de cesación de pagos que se dieron en el mundo en los últimos dos siglos (estudiados y citados por los economistas de Harvard Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff). Se puede, como lo impuso la movilización popular del Argentinazo en 2001. Se puede, llamando a conformar un club de países deudores latinoamericanos para así enfrentar cualquier intento de represalia del capitalismo imperialista, tal como lo hace hoy África, donde hay un llamamiento conjunto de varios países para el desconocimiento de sus deudas.

Se puede y se debe, finalmente, porque en medio de la pandemia del coronavirus no cabe ninguna duda de que hay que poner todos esos recursos al servicio de las más urgentes necesidades populares. La deuda externa, la cadena más sólida de nuestro sometimiento al imperialismo, el motivo más importante de nuestra decadencia, de la miseria y el hambre de nuestro pueblo, debe romperse. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad llamamos a hacerlo, conformando la más amplia unidad con todos aquellos dispuestos a avanzar en este sentido.

El gobierno pagó 320 millones de dólares en efectivo al FMI

Escribe **José Castillo**

En medio de la pandemia, y al mismo tiempo que se sigue con el doble discurso de “no pagaremos con el hambre del pueblo”, Alberto Fernández le abonó al Fondo Monetario Internacional 320 millones de dólares el lunes pasado. Es tan vergonzoso y opuesto a todo lo que se está diciendo que, increíblemente, se trató de mantener la operación “en secreto”. De hecho, fue dada a conocer por la agencia internacional *Bloomberg* y repudiada por nuestro diputado nacional Juan Carlos Giordano antes de que la noticia finalmente apareciera en el diario *La Nación*, único medio que lo registró.

El pago corresponde a un vencimiento de intereses del pacto firmado por Macri con el FMI en 2018, por el cual la Argentina terminó endeudada por 44.000 millones de dólares con el organismo. Este pago, como otros subsiguientes fijados para agosto y noviembre, ni siquiera



reducen el monto, ya que son en concepto de “intereses” (por eso supuestamente le debemos al Fondo 49.000 millones, ya

que 5.000 corresponden a estos intereses que engrosan la deuda). Recordemos que el propio Alberto Fernández, al igual que las autoridades del FMI, reconocieron que la totalidad del préstamo se utilizó para financiar la fuga de capitales de los especuladores financieros amigos del ex presidente.

Denunciamos que, en medio de las necesidades generadas por la pandemia del coronavirus, el gobierno destine ese dinero al FMI. Con esos 320 millones de dólares se podrían haber contratado por un año (con salarios de 50.000 pesos por mes) a 3.200 trabajadores de la salud, o comprado 32.000 respiradores u ocho millones de barbijos. Es una vergüenza que se priorice el pago de la deuda por encima de las más urgentes necesidades populares. Por eso seguimos insistiendo, hay que suspender ya mismo todo pago de deuda externa, incluyendo el acuerdo con el FMI, y destinar todos esos

recursos a un fondo de emergencia para atender los requerimientos sanitarios y sociales del coronavirus.

Deuda: Alberto confesó que se benefician los bonistas

Escribe **Atilio Salusso**

¿Salen perjudicados los bonistas con la renegociación de la deuda? No. Los usureros van a ser beneficiados. Lo reconoció el propio presidente y lo plasmó en papel el economista Alfredo Zaiat este domingo 10 de mayo en una larga nota en *Página/12*.

Zaiat cuenta que le hizo un reportaje al presidente Alberto Fernández, quien dijo sobre la propuesta del gobierno: “Es una oferta que, si la mirás objetivamente, los acreedores no pierden. Solamente ganan menos. ¿Por qué? El capital prácticamente queda intacto porque solamente se afecta un 5% de ese capital. Y en los intereses uno dice ‘ahí la quita es sustantiva’ porque la tasa promedio de esos intereses da 7 puntos y pico, y lo estamos bajando a un promedio de 2

puntos. Perdés 5 puntos de intereses, pero te pago 2 en un mundo que paga cero”. Con esto Alberto Fernández reconoce que la quita es menor y los intereses son exorbitantes medidos a nivel mundial.

Sobre la pregunta ante un posible *default* (no pago), el presidente fue categórico: “Hace unos días tuve una charla con Jeffrey Sachs (economista estadounidense) y me decía ‘no te preocupes por caer en *default* porque el mundo está en *default*’. Y yo le decía que no quería caer en *default*. Efectivamente, nadie quiere caer en *default*. Tanto no queremos caer en *default* que hacemos una oferta para no caer en *default*”. O sea, el economista yanqui le insinúa que podría dejar de pagar sin problemas y el presidente dice rotundamente que no.



¿Quiénes son los bonistas?

Escribe **Guido Poletti**

¿A quién beneficia la renegociación de la deuda en curso? A un puñado, reducidísimo, de grandes especuladores internacionales, todos situados en la crema del establishment financiero imperialista. Ellos solos acumulan el 35% del total de la deuda externa argentina y tienen el “poder de veto” en cualquier renegociación. Acá no hay ningún “pequeño ahorrista” ni “jubilado con bonos” perjudicado.

Veamos. El más grande, el auténtico “director de la batuta” de la renegociación, es BlackRock. Se trata de un emporio de negocios financieros. Maneja fondos por 7,5 billones de dólares y tiene oficinas en treinta países, entre ellos la Argentina. Pasó a ser el número uno mundial de las finanzas en medio de la crisis de 2008, cuando absorbió a uno de los más grandes bancos de inversión de entonces, el británico Barclays. El titular de BlackRock, Larry Fink, figura entre los zares de las finanzas globales y es, obviamente, uno de los megamillonarios del planeta.

El segundo buitre es Templeton, que maneja fondos globales calculados en 850.000 millones de dólares. Si bien es el más antiguo de todos (nació en 1947), su desembarco en nuestro país se dio recién con el macrismo, en 2018, para convertirse rápidamente en uno de los mayores acreedores argentinos.

Después tenemos a Greylock Capital, creado en 1997 y con inversiones financieras en más de cien países. Su fundador es Hans Humes, líder del Comité Global de Tenedores de Bonos de Argentina (GCAB), uno de los principales grupos de buitres que amenazaba a nuestro país luego de que se dejó de pagar en 2001.

El cuarto gran especulador en danza es Fidelity, también con una larga “trayectoria” de hacer superganancias con la deuda externa argentina. Administrador de un fondo global de 1,5 billones de dólares, en 2005 Fidelity fue uno de los pulpos acreedores que cerraron el acuerdo del canje kirchnerista de ese año. En 2011 se transformaron en los grandes acreedores de la provincia de Buenos Aires al comprar los bonos BP21 lanzados por el entonces gobernador peronista Daniel Scioli. En enero de este año exigieron, y consiguieron, que el actual gobernador Kicillof les pague en efectivo un vencimiento de ese bono por 250 millones de dólares a costa de postergar un pago a los docentes de la provincia.

Finalmente, el quinto gran “acreedor” es Pacific Investment Management Company (Pimco), un megafondo con



sede en California que maneja 2 billones de dólares, que fue uno de los acreedores amigos preferidos del macrismo en el período 2018-2019 y un especialista en comprar deuda “riesgosa”, pero con altas tasas de interés como retorno.

A estos superfondos de la ruleta financiera internacional se les debe la mayor parte de la deuda externa argentina. Hay que elegir. Les pagamos a ellos o priorizamos las más urgentes necesidades populares.

Los negocios de la pandemia

Escibe **Reynaldo Saccone**,
ex presidente de la Cicop

Hay más de sesenta equipos en el mundo trabajando para crear una vacuna contra el coronavirus, pero van muy despacio. Una declaración de Bill Gates al *New England Journal of Medicine* explica esta lentitud: “Es necesario que los gobiernos pongan los fondos porque los productos para la pandemia son inversiones de muy alto riesgo; el financiamiento público minimizaría los riesgos para las empresas farmacéuticas y ayudaría a que se metieran en este tema con los dos pies”. Los capitalistas quieren que el Estado ponga los fondos y las empresas se lleven las ganancias. Para que el negocio sea completo, Gates remata: “Finalmente, los gobiernos deben financiar la compra y distribución de las vacunas a la población que la necesita”. Es decir, el Estado financia la producción y luego compra los productos a las empresas. La propuesta de Gates desnuda la verdad: no se avanza en las vacunas si no hay ganancia capitalista garantizada.

Los buenos negocios de la pandemia

La industria farmacéutica y de insumos médicos está viviendo un momento de esplendor. A mediados de marzo de 2020, mientras caían las Bolsas del planeta, los títulos de Alpha Pro Tech, fabricante de barbijos, se disparaban 232 por ciento. Co-Diagnostics subía sus acciones 1.370% gracias a su kit de diagnóstico del virus responsable de la pandemia. Cepheid, la principal fabricante mundial, vende su test a 19,80 dólares cuando su costo es de 3 dólares. Las acciones del laboratorio californiano Gilead trepaban 20% por las perspectivas del antiviral Remdesivir contra el Covid-19, investigación, a su vez, subsidiada por el gobierno norteamericano. El valor bursátil de Inovio Pharmaceuticals, apoyada por Bill Gates, escalaba 200% por su vacuna experimental INO-4800.

Otra forma de beneficiarse es con las inversiones públicas. “Cada molécula aprobada por la FDA (ente federal que autoriza las drogas e insumos médicos en los Estados Unidos) entre 2010 y 2016 fue objeto de investigaciones científicas financiadas por el Estado a través del NIH (ente federal que regula la actividad en salud)”, según el grupo de defensa de Pacientes para Medicamentos Accesibles. El gobierno norteamericano gastó más de 100.000 millones de dólares en ese período facilitando también que las empresas disfrutaran del monopolio de la producción mediante la vigencia de las patentes.



Patentes: una traba al desarrollo

Las patentes, que garantizan la propiedad de los productos y los mecanismos de producción para cada empresa, son al mismo tiempo una traba porque impiden su difusión. El conocido economista capitalista Joseph Stiglitz reconoce que “el control monopólico de la tecnología utilizada en la detección del virus obstruye la rápida introducción de más kits de testeo, como también son un freno las patentes que posee la empresa 3M para barbijos N95 y otros elementos de protección”. Pone como ejemplo, también, la PCV13, vacuna para la neumonía que, al ser propiedad monopólica de Pfizer, es inalcanzable por su costo para gran parte de la población mundial. En India, por ejemplo, todos los años se registran más de 100.000 muertes infantiles evitables por neumonía, mientras que la vacuna le genera a Pfizer ingresos anuales por alrededor de 5.000 millones de dólares.

En las últimas décadas las multinacionales farmacéuticas lograron, por medio de las patentes, ampliar su monopolio sobre la producción de remedios a casi todos los países, aunque con grandes contradicciones. En 1997 el gobierno sudafricano, en su necesidad de hacer frente a la epidemia de sida, promulgó una ley que permitió suspender las patentes necesarias para proveer los remedios requeridos a pesar de la cerrada oposición de los Estados Unidos y las multinacionales. En 2001, durante la llamada crisis del ántrax, los Estados Unidos hicieron lo mismo, suspendieron la patente de la ciprofloxacina que poseía Bayer para todo el mundo. Se dio, entonces, la paradoja de que el país abanderado de la defensa de las patentes monopólicas de la industria farmacéutica apeló al recurso soberano que combatía en el resto del mundo.

Un mundo sin patentes sólo es posible sin propiedad burguesa

“Llevamos demasiado tiempo aceptando el mito de que el régimen de propiedad intelectual es necesario”, escribió recientemente Stiglitz. “Imaginemos un mundo en el que una red mundial de profesionales médicos monitorea la aparición de nuevas cepas de un virus contagioso, actualizan periódicamente la fórmula establecida de su vacuna y luego ponen esa información a disposición de compañías y países de todo el planeta... sin cuestiones de propiedad intelectual y sin monopolio farmacéutico...” Pero la norma es la realidad que él mismo denuncia, las leyes del capitalismo buscando aumentar la renta del capital, y que solo puede desaparecer con la desaparición de esas relaciones de propiedad.

El capitalismo es la traba que impide derrotar de un golpe a la pandemia. Hemos visto a la burguesía imperialista mundial implantar los planes de ajuste que destruyeron los sistemas de salud, incluso en sus propios países de origen; hemos presenciado su lucha contra las cuarentenas como en los Estados Unidos, Italia, Brasil y otros sin reparar en las muertes ni en la diseminación del virus; estamos viendo ahora cómo se realizan pingües negocios a costa de la necesidad de los pueblos y al mismo tiempo sigue recibiendo subsidios y privilegios del Estado con fondos que deberían ir al pueblo en cuarentena. Los trabajadores y el pueblo deberán avanzar hacia la estatización de los servicios de salud y la producción de insumos, remedios y vacunas. Bajo control de los trabajadores, deben ser puestos al servicio de la lucha contra la pandemia. Estas medidas, acompañadas con la suspensión de los pagos de la deuda externa y el impuesto a las grandes fortunas, permitirían acelerar la superación de la pandemia y liberar a la humanidad de la prolongación de estos horrores y sacrificio de vidas.

La salud debe ser una prioridad de verdad

Escibe **Mónica Méndez**,
secretaria de organización de la Cicop

En medio de una epidemia poco conocida, para la cual todavía no existen vacunas ni medicamentos comprobadamente eficaces, los trabajadores de la salud continuamos luchando, no solo contra el virus, sino para proteger nuestras vidas. A casi dos meses de iniciada la cuarentena, ni el gobierno ni las patronales de las clínicas privadas han prestado el debido cuidado a nuestra situación.

Los pequeños avances conseguidos en cuanto a la provisión de elementos de protección para el personal obedecen al continuo reclamo de los trabajadores que sostienen una lucha permanente por sus derechos. Y donde son entregados nunca llegan en cantidades suficientes y continúan siendo de mala calidad, colocando en riesgo nuestras vidas. Hay denuncias concretas de estas irregularidades en municipios como Florencio Varela, Tigre y Lomas de Zamora y en muchas clínicas privadas.

Tampoco hemos logrado los testeos masivos que venimos exigiendo para los trabajadores del sector. Y si bien hay más camas y respiradores, la cantidad de personal que ha entrado al sistema público de salud sigue siendo insuficiente. Por otra parte, el Ministerio de Salud continúa negándose a otorgar licencias a grupos de riesgo, como por ejemplo los mayores de 60 años, por lo que hemos

tenido que lamentar víctimas innecesarias en nuestras filas y ver cómo continúa aumentando la curva del Covid-19 entre nuestros compañeros.

La pandemia nos ha colocado en el centro de la escena. En este tiempo hemos recibido muchos gestos de solidaridad por parte de la población, sin embargo, ni el gobierno ni las patronales han demostrado el mismo reconocimiento. Ni en la provisión de elementos de protección ni mucho menos en recomponer nuestros bajísimos salarios. Solo la Cicop ha cerrado paritaria en la provincia de Buenos Aires y recibido el bono de 5.000 pesos, algo que todavía no se ha hecho efectivo al conjunto de los trabajadores de la salud.

Continuamos movilizados

El 7 de mayo se realizaron diferentes actividades y expresiones de protesta en CABA y en algunas provincias como Córdoba, Santa Cruz y Chaco. El día 11 los compañeros del hospital Príncipe de Asturias, de Córdoba, repudiaron a la Secretaría de Salud por la ordenanza decretada por el intendente que recorta salarios y otros beneficios laborales. Ese mismo día los médicos municipales de La Matanza realizaron un “ruidazo” frente a la municipalidad por la recomposición salarial y contra la precariedad.

En Posadas, Misiones, los trabajadores del hospital Madariaga repudiaron al ministro de Salud, Oscar Alarcón, por tratar de responsabilizar a los propios empleados de los



contagios de Covid-19 en el sector. “Que se haga cargo de la falta de equipos de protección personal”, sentenciaron. Como si esto fuera poco, las empresas privadas de servicios médicos ya comenzaron a cargar el costo de la crisis sobre los profesionales de la salud. El sector privado avanzó en la última semana con recortes salariales y demoras en los pagos. El sanatorio Güemes es la prueba de esto, sus autoridades comunicaron que no abonarán de forma integral los sueldos de abril.

Para el día 15 de mayo está marcada una nueva jornada de lucha. El gobierno no puede continuar mirando para otro lado y pensando que el “éxito” de su plan se resume al aislamiento social. Hay otro elemento determinante, que es el trabajo abnegado y silencioso que cumplimos los trabajadores del sector para apuntalar la salud pública. Nos mantendremos firmes en la exigencia por mejores condiciones de trabajo y salario y garantizando el funcionamiento de los comités de crisis para continuar aportando propuestas a esta complicada situación de la salud.

“Los trabajadores armamos los protocolos porque desde el ministerio no se bajó nada”

El Socialista entrevistó a Marta Fernández
Dirigente de Cicop Hospital Estévez,
Monovalente de Salud Mental para Mujeres
sobre la situación en el hospital

ES- ¿Qué características tiene un hospital monovalente de salud mental en esta pandemia?

MF- Es una cuestión que venimos estudiando con los compañeros para tratar de caracterizar y ver cuáles eran las medidas más urgentes para la prevención. Como es un problema nuevo el que estamos enfrentando, estuvimos leyendo y hablando con infectólogos para prepararnos de la mejor forma. Llegamos a algunas conclusiones, nos parece que el hospital monovalente, que es un neuropsiquiátrico con una población que vive ahí de forma estable, es comparable con un geriátrico. Solo que sería un geriátrico gigante porque estamos hablando de seiscientas personas internadas. El monovalente atiende pacientes que viven ahí, que están internados, y hace consultas ambulatorias y tiene servicios de carácter ambulatorio, como hospital de día, servicio de niños, el IPAN, consultorios externos, o los grupos de prealta.

ES- ¿Tomaron algunas medidas a partir de esas constataciones?

MF- Lo primero que se hizo fue suspender todo lo que era ambulatorio, y las visitas también. Pedimos que se formara un comité de crisis en el hospital para poder consensuar con otros dos gremios que actúan en el sector. Fue bueno porque el personal está dividido por dos leyes, una que nuclea enfermería, el personal de mantenimiento, administración, etcétera. Y otra ley que nuclea a los profesionales. Fue positivo juntarse con los otros gremios y poder formar el comité de crisis para plantear una serie de medidas.

ES- ¿Qué medidas de prevención han adoptado?

MF- Desde la seccional de la Cicop, después de discutir y hablar con los otros compañeros, decidimos que había que aislar a la población. Siguiendo la comparación con un geriátrico, todo el cuidado y la prevención tenían que estar puestos en la gente que circulaba, o sea los trabajadores. Adoptamos medidas de prevención como la toma de temperatura. Todo eso salió del comité de crisis y de la organización



de los trabajadores. Otro aspecto es sobre la rotación, algo que pudimos hacer junto con los otros gremios dentro del comité de crisis. La dirección del hospital estuvo a favor porque había que evitar la circulación de gente. Se dividió casi todo el hospital en dos grandes grupos de trabajo con una rotación semanal, una semana el equipo A y a la siguiente el equipo B. Organizar eso fue terrible porque además tenés que sumarle los problemas que aparecen. Afloran todas las falencias habidas y por haber ya desde antes de la pandemia, principalmente la falta de personal.

ES- ¿Hay algún otro problema de salud a tener en cuenta además del coronavirus?

MF- Todavía no tenemos casos de Covid-19, sí tenemos dengue. Igualmente los protocolos son dinámicos, esto es otra

cosa que tuvimos que armar nosotros. En los monovalentes los trabajadores armamos los protocolos porque desde el ministerio no se bajó nada, y era una gran preocupación. El otro problema era la actitud de la dirección, que decía: “No, acá no va a pasar, no va a entrar, vamos a hacer todo lo posible, pero no va a entrar”. Y nos parecía que eso era errado, desde Cicop entonces colocamos en el comité de crisis todos los escenarios posibles frente a la pandemia. Lo discutimos entre los trabajadores y lo pudimos plasmar en propuestas. Así logramos ser escuchados y que empiecen a pensar en escenarios posibles, y de ahí salieron los cortes, que vamos a evitar la circulación, la organización de los equipos de trabajo para que roten y la sala de aislamiento, que tampoco tenían prevista. Todavía falta mucho y ahora estamos trabajando con los protocolos de dengue.

Dengue: la epidemia invisible

Escribe **Reynaldo Saccone**,
ex presidente de la Cicop

Eclipsada por la pandemia del nuevo coronavirus, la epidemia de dengue sigue sin embargo acumulando casos en nuestro país. El virus del dengue no se contagia en forma directa sino a través de un vector, el mosquito de la especie *Aedes aegypti*. Como tampoco se ha logrado crear una vacuna, se combate la epidemia impidiendo la propagación del mosquito. El *Aedes* se ha acostumbrado a nuestra zona, es endémico, pero el virus del dengue llega cada tanto, cuando hay epidemias en la región, como ahora en Paraguay.

En la Argentina, en la presente temporada 2019/2020, se notificaron 52.594 casos con sospecha de dengue, según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación. Se registraron entre confirmados y probables 22.320 casos autóctonos, otros 1.475 con antecedente de viaje y hay 1.969



casos en investigación. Se trata del brote más importante desde 2016.

La provincia de Misiones registra la mayor incidencia acumulada del período con 236,5 casos por cada 100.000 habitantes, seguida por Jujuy, La Rioja y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con tasas de 225,8, 198,5 y 158

respectivamente. Los registros de la Ciudad de Buenos Aires permiten saber que el 8 de mayo se registraba un total de 6.498 infectados y que los barrios con mayor tasa cada 100.000 habitantes eran los que correspondían a las zonas sur y sudoeste de la ciudad.

Estos números, aparentemente áridos, en realidad están mostrando una conclusión social: la mayor concentración de casos está en los barrios más modestos de la ciudad, los que tienen menor proporción de servicios e infraestructura. Son los barrios olvidados del gobierno de Larreta y donde es más necesaria la higiene urbana y el saneamiento ambiental para impedir la proliferación de mosquitos.

La acción preventiva debe empezar en la temporada fría y “no en el verano, cuando ya hay dengue”, dicen los especialistas. Una epidemia invisible que hace visible el desinterés del gobierno por los problemas que complican aún más la vida de los trabajadores.

Ni despidos ni rebaja salarial

Escribe **Claudio Funes**

Millones de trabajadores están cobrando este mes con rebajas salariales. En la mayoría de los casos se trata de una reducción de 25%, acordada entre el gobierno, la burocracia de la CGT y la UIA. Incluso hay quienes tienen reducciones aún mayores, con la excusa de que no se paga “presentismo”, “premios” u otros adicionales.

Las patronales vienen chantajeando, desde el comienzo de la cuarentena, de que se trata de elegir entre “rebaja salarial” o despidos masivos. La cúpula de la CGT, y también en algunos casos la CTA, les hacen el juego machacando con el fantasma de los despidos.

Muchos compañeros, por eso, se preguntan si no queda otra y efectivamente tenemos que resignarnos a las rebajas de sueldos.

Vamos por parte. La pregunta es ¿es verdad que a los empresarios no les queda otra que recortar salarios?

Nosotros respondemos enfáticamente que no. Las grandes patronales no están perdiendo dinero, a lo sumo, algunas ganan menos. Algunas, y por estos meses después de amasar superganancias año tras año. Y encima están recibiendo millones en subsidios, entre otras cosas para pagar salarios.

La realidad es que las grandes empresas y multinacionales se aprovechan de la pandemia para hacer realidad sus viejos anhelos de rebaja salarial y flexibilización laboral. Una miserable extorsión que aceptan el gobierno y la CGT.

¿Por qué afirmamos esto? El 20 de abril el gobierno resolvió que el Estado se haría cargo del 50% de los salarios del sector privado. Es el denominado Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP), un fabuloso subsidio a las patronales. Sin embargo, posteriormente, junto con la UIA y la CGT, en un acuerdo tripartito, Alberto Fernández avaló la rebaja salarial de 25 por ciento. El gran capital y las multinacionales, entonces, son los grandes ganadores con el recorte salarial y el ATP.

Las grandes empresas no esperaron el acuerdo para rebajar salarios. Ya lo venían haciendo de hecho en los días previos. Un primer antecedente del abuso capitalista en la pandemia se dio con las multinacionales de comidas rápidas (que tuvieron que retroceder por la resistencia de los jóvenes precarizados), que en marzo bajaron los sueldos hasta 50 por ciento, ¡cuando la cuarentena se estableció el 19 de marzo! En solo doce días las patronales utilizaron la pandemia para rapiñar el salario a sus trabajadores. Estamos hablando de McDonald's y Burger King, multimillonarias empresas que sin duda tienen la capacidad de pagar salarios completos por largo tiempo.



Mucho más pueden pagar el 100% de los salarios las grandes multinacionales automotrices, petroleras y metalúrgicas. Ford, General Motors, Fiat, Renault y otras que facturan fortunas en el mundo recortan salarios gracias a los acuerdos con el Smata de Ricardo Pignanelli. Peugeot le pagó a los trabajadores que no están bajo la categoría de suspendidos apenas el 65% del salario, y al resto menos. Las autopartistas, por su parte, pretenden lo mismo, pero con un recorte salarial aún mayor, de 50 por ciento.

Las petroleras, sinónimo de riqueza, como Exxon, Shell, Vista Oil & Gas, Chevron, Pluspetrol y Total, entre otras, firmaron un acuerdo con el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, que les permitió suspensiones masivas de trabajadores que pasaron a cobrar un promedio de 30% de sus ingresos habituales.

Antonio Caló salió corriendo de la reunión tripartita en la que se pactó la rebaja salarial para avisarles a sus amigos de Techint, Aluar y Acindar que ya podían proceder al 25% de recorte.

Entre tanto, los empresarios textiles negociaron con la Asociación Obrera Textil (AOT) el pago de una suma fija de entre 17.000 y 20.000 pesos para los trabajadores suspendidos. Son sumas de indigencia.

Nunca debemos olvidar que a estas dramáticas podas hay que agregarle que los salarios ya vienen perdiendo poder adquisitivo, el 8,4% durante 2019, al que se suma la inflación acumulada de 2020 (7,8% para el primer trimestre).

El alza de precios en el rubro alimentos tiene como promotores, entre otras, a Arcor, Molinos, Mondelez y

Unilever, que continúan, con total impunidad, amasando fortunas durante la pandemia. ¿Dónde está la crisis para estas empresas? Sin embargo, la cámara de la industria alimenticia, Copal, presidida por Daniel Funes de Rioja, fue una de las que más insistió para que se rebajen los salarios.

El dilema rebaja salarial o despido es falso. Eso es lo que quieren los empresarios y los burócratas sindicales que le hacen el juego. De hecho, aún esta rebaja no impidió que siguiera habiendo despidos. Por eso no tenemos que caer en la trampa. Hay que discutir con los compañeros de trabajo que lo que están haciendo las patronales es aprovecharse de la pandemia para meter la baja de salarios como excusa, de la misma forma que tratan de ir por la flexibilización laboral. Ese es el debate que hay que meter en fábricas, oficinas y talleres, en los cuerpos de delegados, las comisiones internas o, incluso, en las discusiones de todos los días. Allí donde sea posible hay que proponer asambleas para discutirlo.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad y el sindicalismo combativo planteamos que hay que pelear contra los despidos y suspensiones y al mismo tiempo exigir que se pague el 100% de los salarios, rechazando cualquier tipo de rebaja salarial o pago fuera de término.

El acuerdo gobierno-CGT-UIA nos muestra también la necesidad de llevar adelante otra tarea: pelear por echar a la vieja burocracia traidora, apoyando y fortaleciendo a las nuevas conducciones y apostando por una nueva dirección para la clase trabajadora. Esa es la tarea que nos planteamos desde el sindicalismo combativo.

¿Gastamos menos los trabajadores en cuarentena?

Escribe **Diego Martínez**

La semana pasada, en declaraciones radiales Alberto Fernández dijo, a modo de justificación del descuento de 25% de los salarios de los trabajadores privados que no desarrollen sus tareas durante la cuarentena, que: “El que no va a trabajar hay un montón de gastos que no tiene, porque no viaja y no come afuera” (*Radio con Vos*, 6/5/2020). ¿Es cierto que quienes estamos en cuarentena gastamos menos?

Rotundamente no. Al presidente se le olvidó tener en cuenta que en cuarentena las familias pasan la mayor parte del tiempo en sus casas, por lo que los padres deben garantizar las cuatro comidas para todo el grupo familiar, lo que implica un gasto superior al que se realiza en una situación normal. La pandemia exige mantener nuestros hogares higienizados de forma permanente, lo que implica, también, un mayor gasto en limpieza. Los gastos son mayores aún si tenemos en cuenta los siderales aumentos de precios que estamos sufriendo. Aprovechándose del aumento en el consumo, los grandes formadores de precios del sector



aumentaron el valor de los cortes de carne entre 70 y 90 por ciento (*Página/12*, 18/4/2020). Algo similar ocurrió con la verdura y los productos de limpieza, que aumentaron en promedio 40 por ciento. A todo esto tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de los trabajadores venimos con salarios atrasados desde hace meses dado que no se realizaron todas las paritarias de este año y que la inflación de

2019 fue, según el Indec, de 53,9 por ciento.

Como si esto fuera poco, se viene el frío y, al pasar la mayor parte del tiempo en nuestras casas, se va a disparar el consumo de gas de los calefactores. Se calcula que el gasto promedio de una familia en este rubro será entre mayo y septiembre de 4.800 pesos, con un pico de 7.100 pesos en julio (*Clarín*, 9/5/2020).

En lugar de intentar justificar a como dé lugar el brutal ajuste al salario que realizó su gobierno en acuerdo con los empresarios, la burocracia sindical y la oposición patronal, el gobierno debería preocuparse por garantizar las condiciones para que los trabajadores podamos hacer la cuarentena sin pasar penurias. Esto implica el cobro de 100% de los salarios, ponerle freno a los grandes formadores de precios y al que no cumpla aplicarle sanciones con la Ley de Abastecimiento, anular los tarifazos de los servicios públicos aplicados por el macrismo y constituir un fondo de emergencia ya sobre la base del no pago de la deuda y la aplicación de un impuesto a las grandes riquezas.

Estatales: ninguna rebaja salarial

Escibe **Pablo Almeida**, delegado general ATE Ministerio de Economía

Los últimos días volvió a arrear en los medios de comunicación masiva una campaña nada novedosa. Indica que existen demasiados empleados del Estado y que el gasto que se desprende del pago de sus salarios debe ser reducido. Todo esto justificado, obviamente, por la crisis económica agravada por la pandemia del coronavirus. La Fundación Mediterránea, Carlos Melconian y varios exponentes del pensamiento económico más “ortodoxo” hicieron un tour por los medios con ideas que iban desde la reducción de puestos de trabajo (o sea despidos) hasta las rebajas salariales o el pago en cuasi moneda. Las y los estatales tenemos sobrada experiencia con estas campañas que son la antesala de ataques contra nuestros derechos laborales. Y esta ocasión no parece ser la excepción.

Los intentos de ajuste ya están aquí y ahora. El pasado 7 de mayo la Legislatura porteña aprobó una ley de emergencia económica en el distrito con mayores recursos del país que habilita al gobierno de Rodríguez Larreta a reasignar arbitrariamente partidas presupuestarias, a congelar salarios, a una



mayor flexibilización laboral y un largo etcétera. Ya varias provincias y municipios han dicho que tendrán que reducir los salarios de sus empleados porque han menguado sus ingresos.

Debemos rechazar la posibilidad de que desde cualquier gobierno –nacional, provincial o municipal– se descargue el peso de la crisis sobre las espaldas de sus trabajadores.

¿Qué dice a todo esto el gobierno de Alberto Fernández? Absolutamente nada. De hecho, y como todo un símbolo, Rodríguez Larreta estuvo sentado a la derecha del presidente en la conferencia de prensa donde se anunció la extensión de la cuarentena solo veinticuatro horas después de aprobada la emergencia ajustadora porteña. Pero no solo eso. Con la excusa de la pandemia se suspendió sin fecha la aplicación de la cláusula de revisión que correspondía al mes de marzo de la paritaria 2019 de los estatales nacionales, que tuvimos un “aumento” de 28% frente a una inflación que superó el 53% en el mismo período. Una forma burdamente solapada de consagrar la pérdida salarial que legó el ajuste macrista.

Es imprescindible que desde cada sector de trabajo, con las dificultades que acarrea el aislamiento social, nos organicemos para enfrentar estas situaciones que golpean fuertemente nuestros derechos. Tenemos que seguir el ejemplo de Ademys y las juntas internas combativas de ATE que, con todos los cuidados y prevenciones, estuvimos en las calles contra la ley de Larreta exigiendo a las conducciones nacionales y seccionales de ATE que rompan la inacción en la que se encuentran y que se organice en forma democrática la pelea en defensa del salario y todos nuestros derechos.

DOCENTES

Ademys movilizó contra la ley de ajuste de Larreta

El pasado jueves 7 de mayo, desde Ademys convocamos a una concentración en la Legislatura porteña a propósito del tratamiento del proyecto de ley de emergencia presentado por Rodríguez Larreta. Esta importante movilización se convirtió en la primera acción en las calles por parte de los trabajadores ante los ataques que venimos sufriendo con las distintas medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno de la Ciudad.

Escibe **Jorge Adaro**, secretario adjunto de Ademys y dirigente de Izquierda Socialista / FIT UNIDAD

La marcha fue propuesta por la comisión directiva de nuestro sindicato y puesta a consideración de la docencia en la primera y numerosa asamblea abierta virtual convocada en el período de cuarentena, de la que participaron más de 250 docentes, que resultó aprobada por amplísima mayoría. Esta movilización fue acompañada por un paro de actividades virtuales que expresó, no solo el contundente rechazo a este proyecto, sino al conjunto de medidas que vienen tomando Larreta y el Ministerio de Educación macrista, que transforman a la actividad docente en verdaderas jornadas de agobio laboral y sobreexplotación. Se han profundizado además los niveles de desocupación de los docentes por la falta de cobertura de todos los cargos de las plantas funcionales de las escuelas desde la implementación del aislamiento obligatorio a partir del 14 de marzo, ya que el gobierno no realiza los actos públicos que podrían ser virtuales, como reclamamos desde Ademys. También se pronunció la asamblea por hacer un llamado público a todos los sindicatos de trabajadores de la Ciudad a realizar la concentración de manera unitaria.

Esta ley de emergencia viene a colocar nuevamente todo el peso de la crisis fiscal, por la falta de recaudación, en los trabajadores estatales. Entre las medidas que establece se encuentran, por ejemplo: el congelamiento de las vacantes en el ámbito dependiente del Gobierno de la Ciudad, el recorte de bonos e incentivos y el congelamiento salarial. No hay una sola que afecte a los grandes contribuyentes ni que ponga en riesgo el pago de la deuda pública a los acreedores, que siguen garantizando enormes ganancias.



La burocracia sindical kirchnerista de la UTE-Ctera, ATE Capital y Agtsyp (Subte) no solo no movilizaron, sino que tomaron el retiro de la posibilidad del pago en cuotas del salario como el fin de sus críticas al proyecto desalentando la movilización unitaria y boicoteando la medida entre los trabajadores. Nada dijeron ni dicen sobre el congelamiento salarial que garantiza la suspensión de las paritarias para la segunda etapa del año, asestando un duro golpe al bolsillo de los estatales. Hay un motivo de peso en esta vergonzosa decisión gremial: el congelamiento salarial será dispuesto más temprano que tarde por todos los gobernadores oficialistas en el marco de la “unidad nacional” para que la crisis la paguemos los trabajadores. Y esto es impulsado por el gobierno nacional de Alberto Fernández. Esta complicidad quedó más en evidencia cuando, al otro día de aprobarse esta ley de ajuste, Fernández y Larreta brindaron una conferencia de prensa en común para seguir flexibilizando la cuarentena. Llamamos a los trabajadores a sacar conclusiones de estos hechos y a repudiar la falta de autonomía de sus organizaciones sindicales.

Sí estuvieron presentes y fueron parte de la concentración los sectores ligados al sindicalismo combativo como ATE-Ministerio de Economía, con su delegado general

Pablo Almeida; Promoción Social, Ministerio de Trabajo, INTI, los trabajadores del hospital Garrahan, AGD-UBA, los enfermeros de la Interhospitalaria y los residentes y concurrentes médicos. Estas organizaciones sindicales, democráticamente, y enfrentando la decisión de las conducciones sindicales de la CGT y las CTA, se sumaron a la convocatoria de Ademys, confluendo en las calles. También se contó con la presencia del Suteba La Matanza, diputados y legisladores del FIT Unidad y la adhesión de las seccionales Multicolor del Suteba, así como también de la junta interna del Indec, entre otros.

Desde Ademys y el sindicalismo combativo seguiremos impulsando la coordinación de las luchas y la organización de los trabajadores por un aumento general de salarios, la exigencia de convocatoria a la Mesa Salarial, el llamado a actos públicos virtuales para la cobertura de los cargos vacantes en educación y por una verdadera ley de emergencia, pero para imponer impuestos progresivos a las grandes fortunas y las multinacionales y por el no pago de la deuda externa para garantizar las medidas sanitarias necesarias para hacerle frente a la pandemia y también defender los derechos laborales y económicos de la clase trabajadora y los sectores populares.

Discurso de Mariana Scayola frente a la Legislatura

Síntesis de la intervención de nuestra compañera Mariana Scayola, secretaria general de Ademys, contra la Ley de ajuste de Larreta.

“Con gran concurrencia y la diversidad de los diferentes sectores que se están manifestando contra la ley de Larreta, que busca manejar de manera discrecional y a criterio propio las partidas presupuestarias, de un presupuesto que ya es insuficiente para salud y educación, como venimos denunciando hace años los distintos sectores sindicales hoy estamos acá.

Se nota además que quiere aprovechar la pandemia para congelar nuestros salarios [...]. Estuvieron los legisladores Gabriel Solano, Myriam Bregman y Alejandrina Barry, que están en la Legislatura. Está el diputado por Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano [...]

Y nos ha llegado el saludo de los Suteba Multicolor, con los que nosotros venimos construyendo hace mucho tiempo. Esta movilización no es fácil en este contexto, y que quiero reivindicar porque estamos en un momento que los trabajadores y trabajadoras en particular estamos siendo gravemente atacados. Esta situación, que a raíz de la cuarentena ha dejado a un montón de compañeras sin trabajo, compañeras que al día de

hoy y hace dos meses están sin ingresos desde que se inició la cuarentena y que no tienen perspectiva de tenerlo. Por eso estamos reclamando un ingreso especial equivalente a un maestro de grado y además la realización de los actos públicos de manera virtual.

Desde Ademys esta semana impulsamos una asamblea muy importante, una asamblea virtual, y lo que impulsamos fue que los trabajadores tenemos que estar organizados para enfrentar los distintos ataques que tenemos por delante. Para poder sostener la cuarentena necesitamos salarios dignos, necesitamos que la familia de nuestros pibes y pibas estén en condiciones y necesitamos que todos los estudiantes y todos los docentes tengan los recursos necesarios, esto es computadoras y, sobre todo, conectividad. En ese sentido, y en ese marco, es que Rodríguez Larreta pretende no solo congelar nuestros salarios y dejar en suspenso el aumento que ya estaba pactado para julio, sino que además intentó avanzar con el pago de salarios en cuotas, por eso es tan importante esta movilización.



Pero compañeros, este ataque que estamos sufriendo como trabajadores de la educación, también lo sufren los trabajadores de la salud, los estatales que están con nosotros. ¡Por eso, para que los trabajadores podamos cumplir con nuestra cuarentena, exigimos un fondo de emergencia donde los que tengan que poner la plata sean los ricos y no los trabajadores y trabajadoras! ¡Fondo de emergencia, por un impuesto a las grandes riquezas y a las multinacionales y por el no pago de la deuda externa!”

EL DRAMA DE LA FALTA DE COMIDA EN LOS BARRIOS POPULARES

Reportaje a referentes barriales de La Matanza

Entrevistamos a José Guzmán, referente del barrio Picaluga, de González Catán, y a Alfredo Méndez, de Rafael Castillo, ambos de La Matanza, para que nos comenten la situación que se está viviendo en sus barrios.

Entrevista a José Guzmán

ES— José, ¿cómo es la situación que se está viviendo en Picaluga?

JG— Por mi barrio realmente falta comida. No aparecen las autoridades para dar respuesta a la necesidad de la gente. También hace falta trabajo. Esto no es un problema que empezó con el coronavirus, sino que viene desde hace mucho tiempo. Es una primera necesidad, y el municipio de Espinoza tiene que resolverlo.

ES— ¿Se organizaron de alguna forma para conseguir alimentos?

JG— Sí. Varios vecinos vinieron a verme a mi casa preguntando cómo podíamos hacer para conseguir comida. Nos hemos movilizado con unos cuantos de ellos a la delegación municipal de González Catán, pero fue en vano. Nos dijeron que nos anotemos por WhatsApp para recibir un bolsón. Nosotros ya nos habíamos anotado pero no nos llamaron nunca. Al menos en mi barrio, y creo que así será en otros, los vecinos no creen en el municipio. Ellos se burlan de la situación, de cómo está la gente. Es una vergüenza.

Nos terminamos organizando entre los vecinos y con la ayuda de los compañeros.

Entrevista a Alfredo Méndez

ES— ¿Cuál es la visión de la situación que tenés de lo que pasa en tu barrio?

AM— Lo primero es que la comida no alcanza. Lo que debería garantizar el municipio a través de Desarrollo Social y de Espinoza es totalmente insuficiente. El problema se ha agravado con las semanas. Es terrible lo que tienen que hacer los vecinos para recibir comida. En un principio solo daban bolsones a los que ya recibían previamente algún tipo de plan. Acá en Castillo esa gente hacía colas de cinco, seis y siete horas. Después, para los que no reciben planes, se habilitó un número de WhatsApp al que tenían que llamar para que te den un turno y retirar en algún club o sociedad de fomento del barrio la comida. Lo que pasó es que a la gran mayoría de esa gente no le contestaban el mensaje, el sistema colapsó totalmente. Así te encontrabas con un montón de vecinos.

ES— ¿Qué solución buscaron los vecinos?

AM— Muchos empezaron a buscar comida deambulando por comedores de distintas organizaciones, pero en todas había una lista de espera enorme. Otros fueron a golpear las puertas de las escuelas. En algunas les dieron comida, pero en muchas ni siquiera les alcanzaba para darle a sus alumnos. Así, muchos



vecinos quedaron a la deriva. Empezaron organizando ollas populares en las casas arriesgándose al contagio, dando de comer a decenas de personas.

ES— ¿Cómo analizás las respuestas que dieron Espinoza y el PJ a la situación?

AM— Desastrosa. Mientras los vecinos hacían colas larguísimas para recibir alimento y algunos no sabían si lo iban a recibir se vio, y está registrado en filmaciones, cómo punteros del peronismo en Laferrere salían con varias bolsas de comida por otra puerta. Totalmente indignante.

Es muy preocupante que en el marco de una pandemia, en la que se aconseja que te quedes en tu casa, la gente tenga que salir a buscar comida por todos lados porque el municipio no lo garantiza. A eso le tenés que sumar los despidos, las suspensiones, las rebajas de sueldos y la situación de la salud. Acá los hospitales y las salitas no dan abasto y hay muchos médicos infectados. La situación es desastrosa.

Villas: el coronavirus golpea muy fuerte

Escribe Ariel Napoli

Al momento de escribir esta nota son 519 los casos de Covid-19 confirmados en las villas de la ciudad de Buenos Aires y en más de 400 del conurbano. En todo el área metropolitana de Capital y Gran Buenos Aires ya tuvimos que lamentar treinta muertes en las zonas más vulnerables.

La villa más afectada es la 31, de CABA, donde se calcula que viven 60.000 personas. Allí en pocos días se pasó de tres casos a casi cuatrocientos. Los vecinos estuvieron una semana sin agua, lo que dificultó enormemente la higienización. Una verdadera barbaridad a la que AYSA y su titular, Malena Galmarini, (esposa de Sergio



Massa) dieron una respuesta absolutamente tardía.

La necesidad hace que los vecinos salgan a vender objetos personales en los pasillos de los barrios, a intercambiarlos mediante trueques o, simplemente, a deambular en búsqueda de comida. Los que tienen la suerte de conservar su trabajo lo hacen en lugares donde las patronales no aseguran las condiciones de seguridad adecuadas y por eso trasladan el virus a los barrios, diseminándose rápidamente debido al estado de hacinamiento en el que viven.

La situación de pobreza, a la que el gobierno nacional sigue sin dar respuesta (el IFE de 10.000 pesos es totalmente insuficiente, muchos no lo cobraron y otros tantos fueron rechazados) y las condiciones de hacinamiento generan una combinación explosiva que provoca

Villas: el coronavirus golpea muy fuerte

que el virus se propague en los barrios más vulnerables con una velocidad alarmante. Es hora de que el gobierno nacional, Larreta en CABA, y Kicillof en Buenos Aires tomen cartas en el asunto. En el caso de CABA, se deben usar los hoteles donde estuvieron internados los repatriados para aislar de forma real a los infectados de los barrios populares. Hay que garantizar

los elementos de limpieza necesarios y el suministro de agua en todos los barrios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Para combatir en serio la pobreza el gobierno nacional debe asegurar un ingreso de emergencia de 30.000 pesos que se cobre por persona y no por grupo familiar y que se pague mensualmente. Para llevar adelante estas medidas se debe tomar una decisión

política, tocar los intereses de las grandes empresas que operan en el país en lugar de seguir beneficiándolas. Se necesita un fondo de emergencia de inmediato, en base a impuestos especiales a las grandes empresas, multinacionales y el no pago de la deuda externa para combatir la crisis del coronavirus. Para que la crisis no la paguemos los trabajadores y sectores populares.

DERECHOS HUMANOS

11 de mayo de 1977: a 43 años de la desaparición de los compañeros del PST de Tolosa

Escribe **José "Pepe" Rusconi**

Hace 43 años, tres jóvenes compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de Izquierda Socialista, compartían un departamento en la localidad platense de Tolosa. Sus nombres eran Mónica de Olaso (Moniquita) de 17 años, Alejandro Ford (el Negro) de 20 años, y Julio Matamoros (el Bocha), de 21 años. Ellos formaban parte de una célula (equipo) del partido. Era la época, bajo la dictadura, en que funcionábamos en la clandestinidad.

Alejandro venía de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Había sido dirigente de esa organización de la Juventud Peronista en la Escuela de Bellas Artes, perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata. Era un excelente dibujante. Su hermano lo había convencido de la propuesta trotskista morenista y lo había ganado para el PST un tiempo antes del golpe. Posteriormente, entró a trabajar como obrero en el área de seguridad de YPF. Julio venía militando desde mucho tiempo antes en la Juventud Socialista. Era estudiante de derecho, un abnegado e incondicional militante, siempre con su semblante serio, que escondía un tremendo humor.



Monica De Olaso
"Moniquita" (18)
(embarazada de 2 meses)

Alejandro Ford
"El Negro" (20)

Julio Matamoros
"El Bocha" (21)

Había entrado a trabajar en el Banco de Crédito Provincial de La Plata. Moniquita era muy jovencita, recién salida del secundario. Estaba en plena formación como militante y en pareja con Alejandro. Muy simpática y divertida. Completábamos la célula, mi compañera, Pelusa, y yo.

El 12 de mayo de 1977, por la mañana, me encontré con otro compañero que me dijo que la noche anterior había ido

al domicilio de ellos. Pero, al llegar, había visto movimientos extraños en la puerta y, posteriormente, personas con armas largas. Al conocer esta situación llamé al trabajo de Julio, donde me dijeron que no había ido. Llamé a su casa y su hermano me dijo, muy exaltado, que tampoco estaba. Él ya no vivía allí, pero el tono de su hermano lo decía todo. Dimos la alarma y tomamos todas las medidas de seguridad para evitar exponernos. Esa fue la última noticia que tuvimos de nuestros compañeros, que pasaron a engrosar la lista de desaparecidos de la dictadura.

En el año 2013 el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó tres cadáveres en una fosa común de indigentes en el cementerio de Ezpeleta (Quilmes). Eran ellos. Figuraban, falsamente, como integrantes no identificados de un grupo que había atacado la comisaría de esa

localidad.

La feroz represión de la dictadura se llevó las vidas de estos tres jóvenes militantes revolucionarios, llenos de ilusiones, que soñaban con un gobierno de los trabajadores para poder construir el socialismo sobre los escombros del capitalismo. Hoy nosotros continuamos la lucha y exigimos justicia. Por eso, en este nuevo aniversario decimos compañeros Alejandro,

MUJERES

Cada vez más mujeres condenadas a la pobreza

Con la pandemia del Covid-19 y la crisis económica capitalista crece la cantidad de personas pobres en el mundo, dentro de las cuales las mujeres somos mayoría, produciendo un crecimiento de las desigualdades de género. El capitalismo muestra su cara patriarcal: la feminización de la pobreza.

Escribe **Mercedes Trimarchi**, diputada bonaerense Izquierda Socialista/FIT Unidad

Más que nunca, hoy con la crisis las mujeres trabajadoras y de los sectores populares estamos siendo afectadas, engrosando las filas de personas desocupadas y arrojando a la miseria creciente a millones de mujeres, niñas, niños y disidencias. La pandemia actual no solo muestra el crecimiento de la violencia de género, sino que una vez más desenmascara la combinación de opresión patriarcal y explotación capitalista sobre nuestro género.

La pobreza no se mide solo en la escasez de ingresos sino que se puede observar desde varias dimensiones, por eso ahora se habla de pobreza multidimensional. La misma refiere a la falta de educación, salud, trabajo, seguridad social, entre otras carencias que afectan al nivel de vida en general. ¿Pero por qué hablamos de feminización de la pobreza? Si miramos los ingresos, en el mundo las mujeres ganamos un 23% menos que los varones, de acuerdo a la brecha salarial. En el mercado laboral la discriminación hace que las mujeres accedamos a los puestos más precarizados y peor pagos. A su vez, somos las primeras despedidas en épocas de crisis y aportamos el mayor número de desocupadas.

En cuanto al acceso a la educación, también corremos por detrás de los varones. En todo el mundo, el 80% de las mujeres adultas sabe leer y escribir (entre los varones el 90%), pero cuando se mira a los países menos desarrollados, sólo el 51%



de las mujeres está alfabetizada, según datos que publicó la ONU en 2015. El informe relata que las causas del abandono escolar son varias: los matrimonios a temprana edad, el trabajo doméstico y el embarazo adolescente, entre otras.

La discriminación condicionada por factores socioculturales también interfiere en el acceso a la salud de mujeres, niñas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así, por ejemplo, las mujeres y niñas son más vulnerables al VIH/SIDA. Por supuesto, hay situaciones que son exclusivas de las mujeres y personas con posibilidad de gestar y son quienes experimentan sus repercusiones negativas (como el embarazo y el parto). Se estima que cada año mueren 2,8 millones de embarazadas y recién nacidos, es decir, uno cada once segundos, la mayoría por causas prevenibles.

El conocimiento de las estadísticas feminizadas y que se visibilice nuestra situación se da gracias a las luchas femi-

nistas en el mundo. Desde Isadora denunciamos la hipocresía con la que los gobiernos capitalistas hablan sobre las desigualdades de género, cuando son sus políticas de ajuste responsables de que se profundice este fenómeno.

La igualdad en la pobreza y en la explotación no es nuestro horizonte

En el mundo las 2.153 personas más ricas poseen una riqueza equivalente a la de 4.600 millones de personas, es decir, el 60% de la población mundial, según el informe anual de Oxfam. El estudio también dice que la desigualdad social es sexista y, por ejemplo, los veintidós hombres más ricos del mundo tienen más riqueza que toda la población femenina de África.

El sistema capitalista patriarcal obliga a que cada noche unas 821 millones de personas se vayan a dormir con hambre (la mayoría, mujeres y niñas) y que por el crecimiento de la pobreza y el hambre podrían morir 300.000 personas por día. Esta desigualdad social va en aumento y, en pleno siglo XXI, con una pandemia en curso, hay 2.100 millones de personas que no acceden al agua potable. Estas cifras por sí solas demuestran que este sistema no es viable porque ya no tiene nada que ofrecernos, solo miseria, explotación y opresión para las mayorías, quienes somos parte de la clase trabajadora y de los sectores populares.

Desde Isadora luchamos contra todos los gobiernos porque con sus políticas favorecen siempre al mismo puñado de ricos multimillonarios y al sistema capitalista patriarcal. Y desde nuestro feminismo, que es socialista, peleamos para transformar la sociedad y organizarla sobre la base de las necesidades de toda la humanidad, es decir, luchamos por el socialismo mundial. Es la hora de organizarnos para transformarlo todo y que el capitalismo y el patriarcado caigan juntos.

No al “aumento” de jubilaciones por decreto

Escribe **Ana Val**

El gobierno de Alberto Fernández ratificó nuevamente que la suba de las jubilaciones será otorgada a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Así será hasta fin de año, mientras se determina una fórmula de actualización “razonable”.

El último incremento fue otorgado en marzo, también por decreto. Allí Fernández estableció una suma fija de 1.500 pesos para todo el universo de haberes con el agregado de un 2,3 por ciento. Se reemplazó así el incremento de 11,56 por ciento, sin distinción de rangos, que hubiese correspondido si se aplicaba la suspendida ley de movilidad de Macri.

De esta forma, lo que terminó sucediendo es que los que menos ganaban (16.195 pesos) cobrasen más que si se hubiese aplicado la fórmula de movilidad suspendida y, por el contrario, los que percibían más de esa cifra terminaron cobrando mucho menos. En síntesis, comenzaba el achatamiento de la pirámide de haberes jubilatorios. Cerca de 2,7 millones de jubilados que no ganamos la mínima nos vimos perjudicados con esta medida.

Alberto Fernández justificó la medida diciendo: “La

fórmula de movilidad de Macri es impagable, los jubilados no van a cobrar nunca ese dinero”. Lejos quedaron sus promesas de “cuidar a los abuelos” y “poner plata en el bolsillo de la gente”. Todo lo contrario, este año el gobierno, a través de este decreto, nos robó, una vez más, 100.000 millones de pesos a los jubilados.

Cuando se trata de incrementos para los jubilados lo razonable difiere de la razón que aplica para dar, sin titubeos, toneladas de dinero a los verdaderos “planeros”: grandes empresarios y multinacionales.

El defensor de la Tercera Edad Eugenio Semino, manifestó al respecto: “De confirmarse los aumentos por decreto para el resto del año, se estará materializando el sueño de Domingo Felipe Cavallo, ratificado por los organismos multilaterales de crédito y la anterior administración: reemplazar el beneficio jubilatorio por un subsidio cuyo monto será decidido por el poder discrecional del gobernante de turno. El jubilado dejará de ser un sujeto de derecho para convertirse en un mero súbdito electoral”.



Desde la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel) repudiamos que el aumento nos lo den por decreto. Exigimos el 82% móvil correspondiente a la categoría en la que nos desempeñamos al momento del retiro y que ningún haber esté por debajo del valor de la canasta del jubilado.

Mail: utjelmarcha@gmail.com

Facebook: Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha

SINDICAL

Se reunió la Mesa Nacional del Plenario Sindical Combativo: coordinar y unir las luchas contra el ajuste

El martes 12 de mayo realizamos en forma virtual una reunión de la Mesa Nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC). Estuve con los referentes de sindicatos, comisiones internas, cuerpos de delegados y agrupaciones de trabajadores que desde hace dos años venimos coordinando para impulsar las luchas y una nueva dirección democrática y combativa en el movimiento obrero.

Escribe **Rubén “Pollo” Sobrero**, secretario general Unión Ferroviaria Seccional Oeste

Pese a las dificultades por el aislamiento social, pudimos dar un paso adelante en la coordinación de los sectores que componemos el Plenario Sindical Combativo. Estuvimos con Mónica Schlotthauer y Juan Guzmán en representación de los ferroviarios del Sarmiento, junto con Jorge Toledo, secretario general adjunto del Sutna; Alejandro López, de los ceramistas de Neuquén; Mariana Scayola y Jorge Adaro de Ademys; Guillermo Pacagnini de la Cicop; Ileana Celotto de la AGD; Angélica Lagunas de ATEN, y dirigentes de sanidad, gráficos, estatales, docentes, entre otros.

Analizamos las distintas luchas en curso contra los ajustes de las patronales y el gobierno. Las peleas que damos donde somos conducción, como la movilización convocada por Ademys contra la ley de emergencia de Larreta; de los trabajadores del Sutna contra las reducciones salariales en FATE; la que damos los



ferroviarios en el ferrocarril Sarmiento para exigir condiciones de seguridad e higiene. También la de los trabajadores de la salud en reclamo de condiciones seguras frente al coronavirus y por el pago completo de salarios donde las patronales lo recortan. Y también las decenas de peleas donde estamos participando llevando toda nuestra solidaridad para que triunfen, como el frigorífico Penta, la alimentaria La Nirva; los mineros de Andacollo, en Neuquén, y muchísimas más en todo el país.

De la discusión decidimos hacer una declaración planteando que la crisis del coronavirus la paguen los capitalistas y en apoyo a todas las luchas. Expresando con claridad que enfrentamos la

flexibilización de la cuarentena que el gobierno de Fernández viene imponiendo, respondiendo a las patronales que quieren seguir manteniendo sus ganancias. También repudiando el pacto de la burocracia sindical de la CGT con el gobierno y la UIA, que acepta la rebaja salarial, los despidos y las suspensiones.

Resolvimos una serie de acciones que sirvan para apoyar y unir todos los conflictos y para plantear a los trabajadores que hay una alternativa frente a las borradas y entregas de la burocracia sindical.

Para eso el próximo martes 19 a las 11 haremos una radio abierta en el Ministerio de Trabajo de Callao, invitando a que todos los compañeros que están en lucha hagan oír sus reclamos y para exigirle al ministerio que dé respuestas.

También decidimos convocar a un gran plenario nacional del Plenario Sindical Combativo, de manera virtual, abierto a representantes de las luchas en curso y dirigentes, delegados y activistas que quieran sumarse y participar el miércoles 27 de mayo a las 17.

El Plenario Sindical Combativo tiene importantes desafíos: seguir rodeando de solidaridad todas las luchas, ayudando a que se desarrollen y triunfen. Impulsar la organización y movilización contra los ajustes. Y seguir dando pasos unitarios para barrer a los traidores en cada gremio y dar lugar a los nuevos dirigentes de lucha

Fate: trabajadores y el Sutna enfrentan provocación de la patronal

Escribe **Martín Fú**

La empresa Fate, el mayor fabricante de neumáticos del país, nuevamente muestra las garras y de qué pasta están hechos los “grandes empresarios argentinos”, al pretender sacar una mayor tajada de sus ganancias, pandemia de por medio, adueñándose de una parte de los salarios de sus trabajadores. Javier Madanes Quintanilla, el patrón y en el ranking 1 de los diez empresarios más ricos del país, reparte su tiempo entre la gigantesca empresa monopólica de aluminio Aluar y la planta de Fate en Victoria, San Fernando, donde el Sutna, nuevamente, se ha puesto en pie de lucha para frenar el ataque contra los trabajadores y la organización sindical combativa.

Es que Madanes Quintanilla otra vez busca poner el dedo en la llaga luego de cincuenta días de parálisis. Con la producción detenida y con un fuerte lobby permitió que el gobierno declarara la producción de neumáticos como esencial. Pero ahora el empresario se resiste a pagar el sueldo completo mientras las multinacionales Firestone y Pirelli ya están produciendo, con un acuerdo y compromiso de pagar el 100% del salario neto.

Desde el Sutna se denunció la provocación de Madanes como una auténtica “extorsión” para que los 1.600 trabajadores de Fate aceptaran rebajas salariales como el piso acordado entre la Unión Industrial Argentina y la burocracia de la CGT, que en diez minutos rifaron los magros salarios de



Fate: trabajadores y el Sutna enfrentan provocación de la patronal...

la mayoría de los trabajadores con el aval del gobierno de Alberto Fernández.

El sindicato ha rechazado el intento de recorte salarial de 25%, con la producción parada desde el inicio de la cuarentena, más los dos casos positivos de Covid-19 que se dieron en la planta. En un comunicado aclaró que “si

los trabajadores hacen la cuarentena, Fate no les paga; si no aceptan esta rebaja salarial, no abren la fábrica. Nos obligan a salir a luchar por nuestros derechos en plena pandemia”. Es así que el pasado lunes el Sutna se movilizó al Ministerio de Trabajo. Diversos luchadores, organizaciones políticas y sindicales los acompañaron.

Ademys, los ferroviarios del Sarmiento, los trabajadores de ATE-Mecon, los Suteba combativos, entre otros, llevaron la solidaridad a esta lucha tan importante. Izquierda Socialista desde un primer momento fue parte de la jornada y llevó su apoyo con nuestro compañero, el diputado nacional Juan Carlos Giordano.

Neuquén: todo el apoyo a la gran lucha de los mineros

Escribe **Mariano Barba**

Los mineros de Andacollo continúan cortando la ruta nacional 22, a 50 kilómetros de la capital neuquina, porque hasta ahora no obtuvieron respuesta al cobro de los salarios caídos de los últimos dos meses ni a la continuidad laboral.

La empresa yanqui Trident Southern Explorations S.P.A., que también tiene emprendimientos hidrocarbúricos instalados en Vaca Muerta, no cumplió ningún punto de los acordados en el acta firmada a fines de abril. Es más, en las últimas horas salió a la luz que la empresa se presentó en concurso de acreedores en tribunales de Buenos Aires y que ni siquiera depositó el millón de dólares de garantía que debió realizar en 2016 cuando se firmó la concesión que se extendía hasta 2042. Si estuviera depositado ese millón de dólares se podrían pagar los sueldos de todos los mineros durante ocho meses. Es más, en ese convenio, firmado por la empresa Trident y el estado provincial a través de Cormine S.E.P. (empresa del Estado), se afirma que el objetivo por parte del Estado “es gestionar la mina para preservar la fuente laboral y el respeto al medio ambiente”.



Apenas pasaron tres años cuando la concesión estalló porque la empresa resultó ser estafadora y pirata.

Es evidente la complicidad del gobierno provincial que, a través de Cormine debía ejercer el contralor y nunca lo hizo ni exigió que se depositase el fondo de garantía, y, además, nunca controló el modus operandi de la empresa que los propios obre-

ros venían denunciando. En sus comienzos los obreros advirtieron a la patronal sobre la inconveniencia de entregar la concesión de la mina de oro y plata a Trident.

La situación hoy es que cincuenta obreros cortan la ruta rodeados por la Gendarmería, mientras otros casi doscientos toman las instalaciones de la mina cuidando que no se lleven las máquinas y realizan colectas de víveres en los pueblos del norte para sobrevivir. Desde la multisectorial impulsada por el Sindicato Ceramista, el Frente Multicolor de Aten y las agrupaciones sindicales combativas se debatió el apoyo total a la lucha de los mineros y preparar una caravana hasta el lugar donde cortan la ruta. Junto con nuestra compañera concejala Angélica Lagunas, los compañeros de Izquierda Socialista nos acercamos permanentemente para llevar el apoyo, aportando para sostenerlo y, a su vez, exigiendo,

como lo hacen los obreros, que el gobierno provincial garantice el pago de los sueldos atrasados y la continuidad laboral a través de Cormine, que es responsable solidaria de ese pago. También estamos planteando que la solución de fondo es la administración provincial de la mina controlada por sus propios obreros.

Sigue la lucha en Penta

Escribe **Martín Fú**

Los trabajadores del frigorífico Penta, en Quilmes, siguen sin respuestas. Después de dos meses con la planta sin producir y sus 240 trabajadores sin cobrar, el dueño de la empresa, el dirigente peronista Ricardo Bruzzese, sigue operando sus otros negocios con total impunidad a pesar de la pelea que vienen dando los trabajadores, que se han quedado en la calle y sin sus sueldos. El gobernador Kicillof y la jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza, hasta el momento lo único que han hecho es mandar a la policía para reprimirlos, como ocurrió el pasado 9 de abril en la puerta del establecimiento. Por otra parte, los trabajadores han recibido múltiples muestras de solidaridad y acompañamiento de dirigentes sindicales opositores, agrupaciones políticas, sociales y de derechos humanos. El caso de Penta quizás fue el primero en desnudar, en épocas de pandemia, la miserabilidad de los empresarios y la complicidad de las conducciones de los sindicatos traidores y los gobiernos patronales para dejar en la calle a cientos de trabajadores y muestra la necesidad de los trabajadores

de uniros para dar una pelea de conjunto. Porque, a pesar de haberse dictado la conciliación obligatoria, el Ministerio de Trabajo no la hace cumplir. Aunque la actividad es esencial -producción de alimentos- el empresario sostiene el cierre ilegal de la planta.

El pasado lunes los trabajadores marcharon a Plaza de Mayo como una muestra de la voluntad de seguir la pelea y con el objetivo de visibilizar el conflicto. Buscan que “el presidente Alberto Fernández, de una vez por todas, se dé por enterado y nos dé alguna respuesta”, como se escuchó decir a uno de los trabajadores que marcharon. El gobierno de la provincia, como única respuesta hasta el momento, ha ofrecido bonos de 10.000 pesos para cada trabajador, cuando la pelea de fondo es la reincorporación inmediata de todos los obreros y la reapertura de la planta para relanzar la producción de una actividad esencial. Desde Izquierda Socialista vamos a seguir acompañando a los compañeros de Penta.



NOTICIERO SINDICAL

Conflictos en Córdoba

La política del gobernador Schiaretti y los intendentes al priorizar el pago de sus deudas públicas, combinada con la caída de la coparticipación, la recaudación local y la represión, está incentivando luchas en la provincia. En su mayoría están encabezadas por los dirigentes de los gremios del sector, que no llaman a profundizar la movilización y mucho menos la coordinación. Salvo el caso de los municipales de Jesús María.

Transporte interurbano y urbano. Paro por tiempo indeterminado por falta de pago salarial. El primero comenzó el 15 de abril y el segundo el 8 del mes en curso y se mantiene hasta hoy.

Municipales de Jesús María. Asamblea por incumplimiento de un aumento acordado, convocada por una nueva conducción gremial que, por orden judicial, fue brutalmente reprimida por la policía del intendente radical Picat y la guardia de infantería de Schiaretti, con 42 trabajadores presos con el argumento de que violaron la cuarentena. Se logró su



liberación y que el intendente diera un bono que cubre el acuerdo. La negociación continuará el 26 de mayo.

Bagley (Grupo Arcor). La Justicia, actuando de oficio y aduciendo que se violaba la cuarentena, disolvió con policías una asamblea de la que participaba el secretario general del gremio. Ante el intento de detención del dirigente y otros

trabajadores, la CGT que dirige el burócrata José Pihén, aliado de Schiaretti, se vio obligada a sacar un comunicado de apoyo a esa asamblea y a la de los municipales de Jesús María.

Trabajadores de aplicaciones (deliveries). En el Patio Olmos, punto de concentración para comenzar sus tareas en el centro de la ciudad, realizaron una asamblea repudiando al concejal radical De Loredo, que impulsa una ordenanza para que taxis y remises hicieran delivery. Denunciando que violaron la cuarentena, la policía los reprimió y detuvo a dos jóvenes trabajadores. La respuesta fue una numerosa y ruidosa caravana de motos y bicicletas días después, que volvió a normalizar la situación y su trabajo.

Municipales de la ciudad de Córdoba. El intendente Llaryora, siguiendo la política de Schiaretti, se rebajó 30% su salario hasta que pase la pandemia y, con el argumento de que nadie puede ganar más que el intendente y “reducir costos”, hizo aprobar en el Concejo Deliberante la rebaja de una hora de la jornada laboral y modificaciones en las condiciones del convenio que significarán el recorte permanente

de 15% del salario de los estatales. La respuesta fue una movilización al Concejo Deliberante de los delegados, trabajo a reglamento y la presentación judicial contra esa ordenanza, que solo fue votada por el PJ y con el repudio de Laura Vilches, concejala del FIT Unidad.

En todos estos conflictos los trabajadores contaron con el total apoyo de nuestra militancia, presente y con las declaraciones de nuestras figuras públicas y dirigentes.

Morón: gran triunfo de los trabajadores de pizzería Cabildo

“Si se pelea se puede”. Esta conclusión sacaban los trabajadores de la tradicional pizzería que, tras dos meses sin cobrar, decidieron instalarse en la puerta del local para conseguir el pago adeudado. Y lo lograron.

El comercio había cerrado el 20 de marzo cuando se dictó la cuarentena. De ahí en más, los dueños Benjamín Cuadra y Francisco Galicio, que son propietarios de más de 120 pizzerías en la zona oeste del conurbano bonaerense, no contestaron ni siquiera las cartas documento enviadas por los trabajadores.

Para ser escuchados, el 1° de mayo se comenzó a montar guardia en la puerta, evitando así un intento de vaciamiento del negocio y a la vez para llamar la atención de los vecinos. No bien nos enteramos, nos hicimos presentes desde Izquierda Socialista junto con compañeros del cuerpo de delegados del Sarmiento, con el Pollo Sobrero a la cabeza, y del gremio de pasteleros, para ponernos a disposición de la lucha.

Rápidamente, los trabajadores lograron que los medios les prestaran atención y en sus declaraciones denunciaron a los dueños y reclamaron: “queremos que se nos paguen los dos meses que se nos deben y volver a trabajar, la estamos pasando muy mal”.

Producto de su lucha y de la solidaridad recibida, fueron citados al Ministerio de Trabajo el pasado jueves 7 y lograron un acuerdo por el que se les pagarán los dos meses de sueldo adeudados y el compromiso de los dueños de reabrir para funcionar con la modalidad de delivery.

Desde Izquierda Socialista queremos saludar el triunfo de los compañeros. Su lucha es una muestra de que la crisis del coronavirus no la tenemos que pagar los trabajadores.

Postres Balcarce: dueño cierra la fábrica a pesar de las ganancias obtenidas

Ciento treinta trabajadores de la reconocida marca de postres y alfajores quedaron en la calle luego de que su dueño Mario Sanabria cerró la fábrica, adeudando salarios y desapareciendo de los lugares que frecuentaba. Mario Sanabria, que hace unos meses festejaba el repunte de las ventas coincidiendo con las fiestas, se fue adeudando salarios, en algunos casos desde fin de año. La deuda se conoció hace meses y las cúpulas de los sindicatos de Comercio y Pasteleros no vienen haciendo nada para preparar la pelea. Es por ello que los trabajadores discuten los pasos a seguir, con toma de planta incluida, como una de las posibilidades. Acompañamos la lucha de los trabajadores de Balcarce ante este fraude escandaloso de la patronal.

Mondelez, en plan de lucha

A los trabajadores de la gigante internacional de la alimentación Mondelez (ex Kraft), que posee plantas en Victoria y Pacheco, Buenos Aires, los dirigentes sindicales de Alimentación, con Rodolfo Daer a la cabeza, les han metido la mano en el bolsillo, como al grueso de los trabajadores industriales. La bronca en las dos plantas es mayor, ya que nunca dejaron de producir durante la pandemia, acumulando productos no esenciales como chicles y caramelos. Igualmente, la patronal y el sindicato han acordado la suspensión de quinientos trabajadores con una rebaja salarial de 25 por ciento. Los trabajadores se encuentran en alerta, repudiando y rechazando la maniobra de la patronal y esta nueva traición de la burocracia sindical.

Despidos en SanCor

Desde comienzos de la cuarentena SanCor viene despi-

diendo en forma encubierta y presionando a sus empleados para que acepten “retiros voluntarios”. Aquellos que se encuentran suspendidos ni siquiera cobran el 75% que la patronal firmó con el gremio Atilra a espaldas de sus representados.

En el Centro de Distribución Acceso Norte (CDAN) han iniciado, con la colaboración del sindicato y de la comisión interna, una persecución directa sobre aquellos trabajadores que mantuvieron una línea independiente en los últimos años. Pretenden acallar a quienes denunciaron las maniobras que la empresa realiza para que los costos de la reestructuración la paguen los trabajadores y la responsabilidad de los dirigentes de Atilra en dejar pasar el ajuste. Los trabajadores rechazan la extorsión, los despidos encubiertos y las persecuciones, a su vez exigen la reincorporación inmediata de los despedidos y el pago de los salarios a todos, estén en producción o suspendidos por una empresa que, por producir alimentos, está considerada como servicio esencial.

Universidad de Luján: los docentes logramos la apertura de paritarias locales

Escribe **Nicolás Pellegrini**, docente de la UNLU

Con el cierre de la universidad por la pandemia, al igual que el resto del sistema educativo, desde el rectorado, en línea con las disposiciones del gobierno nacional, se nos impuso el dictado de clases por medios virtuales o teletrabajo para garantizar la supuesta “continuidad pedagógica”.

Esto generó un cambio rotundo en las condiciones de trabajo y una violación a nuestro convenio colectivo de trabajo, flexibilizando las jornadas laborales, sumado a los problemas de conectividad, tanto de docentes como de estudiantes, y la falta de criterios de acompañamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.

El malestar y los reclamos han ido creciendo hasta el pasado 29, cuando se realizó una asamblea virtual de nuestro sindicato Adunlu, de la que participó un importante número de docentes que, luego de un rico intercambio, votó iniciar un plan de lucha para la apertura de la paritaria local y la confección de un pliego de reivindicaciones.

Paramos el 6 de mayo, mientras las autoridades de la UNLU continuaban negando tal escenario. Ante la contundencia de la medida el rector debió llamar a la paritaria para el próximo miércoles 13.

La lucha no terminó, pero es un primer paso muy importante que logramos entre todos los docentes de la universidad.

CABA: ¡No a la suspensión del Programa Adolescencia!

El Programa Adolescencia funciona bajo convenio de gestión asociada con organizaciones sociales, artísticas y formativas en la Ciudad de Buenos Aires. Las instituciones reciben una transferencia de recursos para la contratación de equipos de trabajo y los adolescentes una beca en dinero para viáticos. Este año se preveía desarrollar actividades con 9.000 adolescentes. En el marco de la actual pandemia el Gobierno de la Ciudad decidió suspenderlo. Por ello las instituciones se han organizado y solicitado al Ejecutivo de CABA la posibilidad de realizar las actividades de manera virtual como forma de acompañar a esos 9.000 adolescentes. También reclamaron lo mismo los trabajadores de planta del programa. Por ahora solo han recibido negativas, dejando a los adolescentes sin participación y sin becas, a las instituciones sin recursos y a los empleados de las instituciones sin trabajo. Reclamamos la inmediata reactivación del programa y el pago de las becas.

Textil Iberoamericana: un avance en la lucha

El jueves pasado los compañeros de la textil ubicada en Ramos Mejía realizaron una nueva acción de lucha en la puerta de la fábrica. Allí se hicieron presentes trabajadores metalúrgicos, docentes y de otros gremios que acercaron su solidaridad. También estuvieron distintas organiza-

ciones sociales y partidos de izquierda, entre los que concurrimos con una nutrida delegación de compañeros de Izquierda Socialista de La Matanza.

Como fruto de su lucha lograron que, después de tres meses sin cobrar un centavo, este fin de semana la patronal depositó 30.000 pesos a cada trabajador. Felicitamos a los compañeros, a la vez que nos seguimos poniendo a disposición con todo lo que sea necesario para seguir apoyando su lucha hasta cobrar la totalidad de los salarios adeudados por la patronal.

La Matanza: concentración de trabajadores de la salud

Trabajadores de salas de salud periféricas realizaron una concentración frente al municipio de La Matanza reclamando insumos y aumento salarial. Los profesionales de las “salitas” cobran sueldos promedio de 35.000 pesos, casi la mitad de la canasta familiar. Una vergüenza. Y, como viene ocurriendo, se encuentran totalmente desprovistos de elementos de cuidado personal para hacer frente a la pandemia y a las numerosas enfermedades que se presentan en las “trincheras” de los barrios. Además del coronavirus, se enfrentan con otras enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis. Desde Izquierda Socialista nos hicimos presentes con una delegación y con nuestras compañeras Graciela Calderón y Olga Ortigoza, dirigentes del Suteba La Matanza, quienes hicieron uso de la palabra acompañando el reclamo de las y los trabajadores. ¡Defendamos la salud pública!

Despidos y precarización en La Plata

Trabajadores de la región platense vienen sufriendo despidos, suspensiones y precarización. En Ensenada, YPF y Siderar (Techint) suspendieron con rebaja salarial y rescindieron contratos de miles de trabajadores. Empresarios gastronómicos aprovecharon la excusa de la cuarentena para despedir. Empleados de la emblemática Confeitería París denuncian que los dueños los despidieron con la intención de reabrir en unos meses con personal nuevo y precarizado. Trabajadores en negro de concesiones gastronómicas y de atracciones de la municipalidad (Centro Cultural Islas Malvinas y República de los Niños) también denunciaron despidos, mientras los concesionarios ligados al intendente Garro (Cambiamos) abren nuevos emprendimientos. El gobierno provincial también despide, como en Vialidad y la Dirección de Escuelas, o en la empresa tercerizada de limpieza Distribon de las torres administrativas provinciales 1 y 2.

Desde Izquierda Socialista acompañamos las acciones de lucha que se realizaron con cortes de calle frente a la Municipalidad y, ante la borrada de las burocracias sindicales, de las primeras reuniones de coordinación, donde participaron juntas internas combativas. En los próximos días habrá nuevas acciones para exigir reincorporación y pase planta a las cuales volveremos a dar nuestro apoyo.

La Nirva: no a las amenazas y a la represión. ¡Que la patronal pague los salarios ya!

Las trabajadoras de La Nirva (fábrica que produce los alfajores “Grandote” y “Recoleta”) hace siete meses que no cobran su salario. Ante la falta de respuesta de parte de la patronal y el municipio de La Matanza a cargo del peronista Espinoza, se encontraban haciendo un acampe en la puerta de la fábrica cuando el pasado lunes 11 recibieron amenazas de parte de personal allegada a la empresa, tras lo cual la policía procedió a desalojarlas, siendo que estaban al tanto del acampe hace una semana.

Al día siguiente, se convocó a una acción de solidaridad en la puerta de la fábrica, en la que nos hicimos presentes junto a nuestro compañero Pollo Sobrero y a compañeros del gremio pastelero, además de hacer una contribución de parte nuestro partido al fondo de huelga de las trabajadoras. Actualmente, se retomó el acampe en la puerta de la empresa para evitar que la patronal vacíe la fábrica.

¡Que la patronal pague los salarios ya! Exigimos al municipio y al gobierno provincial de Kicillof que tomen cartas en el asunto, garantizando el cobro de salarios y la continuidad de la fuente laboral.

En cuarentena: sigue el saqueo y la contaminación

Escribe **Ambiente en Lucha**
Juventud de Izquierda Socialista

Pese a que millones de personas se encuentran cumpliendo la cuarentena, cada vez son más las denuncias y los permisos que el gobierno de Alberto Fernández concede a las grandes multinacionales extractivistas. A partir del decreto 450/2020, impulsado por Cabandié y el lobby minero, se habilitan las actividades vinculadas con la producción, distribución, comercialización forestal y minera, dando lugar a que la actividad de las megaminerías contaminantes y el agronegocio continúe. Como ya dijimos, este gobierno de doble discurso llegó para profundizar los proyectos extractivistas que contaminan el ambiente, como la megaminería, el fracking, la deforestación, el monocultivo y el uso de agrotóxicos.

Durante la cuarentena han aumentado las denuncias de deforestación sufridas en el Norte de nuestro país. Los gobernadores Insfran, Zamora y Capitanich son los responsables de este avance en la deforestación en plena cuarentena, donde ya se perdieron más de 9.000 hectáreas, un poco más de 200 hectáreas por día. Esto va de la mano con los permisos que el gobierno concede para el uso de agrotóxicos. El avance



de la frontera del agronegocio sigue arrasando los bosques autóctonos de nuestro país. ¿Cuál es el negocio? Imponer el monocultivo para que los grandes terratenientes y latifundistas ganen millones a costa de la destrucción ambiental.

El retorno de la minería es otro privilegio que le otorga el gobierno a las megaminerías contaminantes en medio de las luchas contra la actividad, como la triunfante rebelión mendocina en defensa del agua y el ambiente o la que, a pesar de la cuarentena, llevaron adelante en Esquel contra el peronista de confianza y amigo del presidente, Arcioni, gobernador de

Chubut, que no solo avanza con la megaminería, sino que además precariza, despide y adeuda salarios a cientos de trabajadoras y trabajadores.

Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Felipe Solá, impulsó la quita de aranceles a las importaciones de insumos para la fabricación de agrotóxicos. El mismo Felipe Solá que fue secretario de Agricultura durante el gobierno de Carlos Menem y abrió las puertas a multinacionales como Monsanto para impulsar el agronegocio en el país. Esta reducción de aranceles sirvió de modelo para que la imiten otros países que integran el Mercosur, demostrando la política a favor de los agronegocios en el resto de los países del cono Sur.

Crece en todo el mundo un movimiento ambientalista que lucha directamente contra los intereses de los grandes capitalistas que intentan avanzar sobre los recursos, esto se ve en las masivas huelgas mundiales por el clima. Desde Izquierda Socialista creemos que hay que seguir luchando para poner fin a la megaminería a cielo abierto, a la tala indiscriminada y por la prohibición de los agrotóxicos. ¡Fuera Monsanto y Barrick! En defensa de los pueblos fumigados. Nos unimos en la lucha por un ambiente sano y por una producción racional al servicio de las necesidades populares.

ANIVERSARIO

El Ejército Rojo toma Berlín: a 75 años del fin de la segunda guerra mundial

El 2 de mayo de 1945 los nazis se rindieron en la capital alemana. La derrota nazi representó el más colosal triunfo revolucionario y democrático de la historia de la humanidad. Se abrió una nueva etapa de ascenso revolucionario donde aún sigue vigente la tarea de construir una dirección revolucionaria.

Escribe **Francisco Moreira**

En marzo de 1939 los ejércitos de Hitler invadieron Checoslovaquia. En septiembre entraron en Polonia. Una semana antes, la conducción burocrática de la Unión Soviética, con Stalin a la cabeza, había facilitado el avance nazi al firmar un aberrante y escandaloso pacto de “paz y ayuda mutua” con Hitler, con quien se repartieron Polonia.

Trotsky, que venía denunciando desde el ascenso del nazismo en Alemania en 1933 la perspectiva de una nueva guerra imperialista, calificó al pacto germano soviético como “una capitulación de Stalin ante el imperialismo fascista con el fin de resguardar a la oligarquía soviética”. Denunciaba que el fascismo y el nazismo tenían por objetivo imponer regímenes de superexplotación en los países conquistados y borrar del mapa a la Unión Soviética donde, a pesar de la dictadura burocrática, se mantenían las bases socialistas del gran triunfo revolucionario de 1917.

En junio de 1941, efectivamente, comenzó la Operación Barbarroja, la invasión nazi a la Unión Soviética. La confianza de Stalin en su pacto con Hitler y la desorganización del Ejército Rojo, descabezado a fuerza de purgas por la burocracia estalinista en su intención de barrer toda oposición “trotskista”, no permitieron oponer resistencia a la maquinaria de guerra nazi. Para diciembre ya habían ocupado Lituania, Bielorrusia, Ucrania y llegado hasta las puertas de Moscú, ocupando Stalingrado y sitiando Leningrado. En 1942 gran parte de Europa y un tercio de la Unión Soviética habían caído bajo las garras del nazismo y el fascismo.

La batalla de Stalingrado, hacia la derrota del nazismo

Pese a las terribles penurias vividas, el pueblo soviético logró recuperarse y poner de pie al Ejército Rojo nuevamente. Luego del desastre inicial se pusieron al frente del ejército los generales soviéticos más capacitados, como Zuhov, Rokossovski y Chuikov. Stalin se autotituló “jefe de la defensa”. Así comenzaba “la gran guerra patria” de los pueblos soviéticos.

En feroces combates y, a pesar de los continuos desastres provocados por la burocracia, el Ejército Rojo fue recuperando

terreno y haciendo retroceder a los nazis. En febrero de 1943 se produjo la primera gran victoria soviética, la rendición de los nazis que ocupaban Stalingrado, que cambió el curso de la guerra. Fue el principio del fin del nazismo.

El triunfo en Stalingrado devolvió a los pueblos ocupados la esperanza de que era posible derrotar a los nazis. Los movimientos de la resistencia se fortalecieron en todas partes. En Polonia se levantó el Gueto de Varsovia en abril de 1943 y toda la ciudad en agosto de 1944, pese a que había sido abandonada por orden de Stalin. Los maquis franceses, los partisanos italianos (cuyo himno de resistencia era el famoso Bella Ciao) y las guerrillas yugoslavas y griegas se fueron fortaleciendo. En junio de 1944 ingleses y estadounidenses desembarcaron en Normandía, en la Francia aún ocupada por los nazis. En agosto la resistencia liberó París.

La batalla de Berlín

El 12 de enero de 1945 el Ejército Rojo entró en territorio alemán. Tras un avance arrollador, el 14 de abril llegó a las afueras de Berlín. Dos días después comenzaría la batalla final de la guerra en Europa.

Los nazis organizaron dos líneas defensivas para defender la ciudad sitiada. Prepararon barricadas y cientos de búnkeres. Con lanzagranadas enfrentaron el avance de los tanques del Ejército Rojo. El costo para los soviéticos fue altísimo. Solo en esta batalla tuvieron casi 80.000 muertos y más de 270.000 heridos.

La acción final se libró por el control del Reichstag (Parlamento), que era el edificio más alto del centro de la ciudad y cuya captura tenía un valor simbólico. En la tarde del 30 de abril soldados soviéticos lograron la toma del edificio e hicieron ondear la bandera roja. En esas horas Hitler, que había intentado seguir dando órdenes desde su búnker, se suicidó. Dos días antes, en Italia, el fascista Mussolini había sido capturado y fusilado por los partisanos.

El 2 de mayo el comandante a cargo de la defensa de Berlín firmó la rendición ante los generales soviéticos. El 8 de mayo se realizó una ceremonia con la presencia de generales ingleses, franceses y estadounidenses que, junto a Zhukov, firmaron un acta con la definitiva rendición del alto mando alemán. La guerra había terminado, dejando tras de sí más de cincuenta millones de muertos, de los cuales veintidós millones eran soviéticos.

Una nueva etapa revolucionaria

El triunfo de los pueblos soviéticos y europeos, iniciado en la batalla de Stalingrado y consolidado con la toma de Berlín,



abrió una nueva etapa de enorme ascenso de masas mundial. El dirigente trotskista argentino Nahuel Moreno insistió en sus elaboraciones en que la derrota del nazismo había iniciado una nueva etapa revolucionaria mundial. Desde el fin de la guerra “el proletariado y las masas del mundo entero obtienen una serie de triunfos espectaculares. El primero es la derrota del ejército nazi, es decir, de la contrarrevolución imperialista, por parte del Ejército Rojo, aunque esto fortifica coyunturalmente al estalinismo, que es quien dirige la URSS”.

Efectivamente, desde entonces, las masas populares protagonizaron numerosas revoluciones triunfantes logrando la independencia de decenas de colonias y hasta la expropiación de la burguesía en un tercio del planeta en países como Yugoslavia, China, Cuba y Vietnam.

Pero durante esta etapa también salieron fortalecidas direcciones burocráticas del movimiento obrero y de masas. Stalin, por ejemplo, utilizó su renovada autoridad para rechazar la extensión de la revolución socialista e imponer pactos con los gobiernos imperialistas en la reconstrucción capitalista de Europa. El Partido Comunista soviético impuso el desarme de los maquis franceses y partisanos italianos para construir gobiernos de unidad con los partidos burgueses de esos países. También permitieron el aplastamiento de la guerrilla griega a manos británicas. Tras la muerte de Stalin, otros aparatos y dirigentes estalinistas o nacionalistas burgueses continuaron con esa política.

Estas experiencias dejan una doble enseñanza para el siglo XXI. En primer lugar que, como lo demuestra el triunfo sobre el nazismo, los pueblos pueden lograr enormes triunfos aun con dirigentes burocráticos y traidores, cuyo máximo exponente fue Stalin. Pero también que la tarea más difícil y necesaria sigue siendo la de construir una nueva dirección revolucionaria para acabar definitivamente con la contrarrevolución imperialista, en cualquiera de sus variantes, y con todo el dominio capitalista mundial.

Llamamiento: luchemos por un plan global de emergencia obrero y popular

¡Que la crisis del coronavirus la paguen los capitalistas!

La pandemia del Covid-19 está siendo utilizada por el imperialismo, los gobiernos capitalistas y los grandes empresarios para buscar descargar la crisis sobre la clase trabajadora y los sectores populares del mundo. Ya millones sufren el despido o la rebaja salarial y crece el hambre para amplios sectores de la población pobre de todos los continentes.

Esta pandemia no ha terminado y no se sabe cuándo será superada. No hay vacuna a la vista. El coronavirus, como el cólera, el dengue o el sarampión, surgieron del caldo de cultivo que crea el sistema capitalista imperialista. Solo se explica en el marco de la miseria creciente, el hacinamiento habitacional y de la degradación ambiental que producen las multinacionales en su carrera por las ganancias a costa de la superexplotación de las masas. Se puso en evidencia la destrucción de los servicios públicos estatales de salud, producto de años de ajuste y reducción de los presupuestos. En especial en las principales potencias capitalistas como Italia, el Estado español o los Estados Unidos. En Italia durante diez años redujeron el presupuesto de salud en más de 30.000 millones de euros. En los Estados Unidos casi no hay un sistema público estatal. Pero esto también se da, bajo distintas formas, en todos los países del mundo. El capitalismo alienta el negocio de la salud privada.

Y ahora, ante esta calamidad global que ellos facilitaron, no se quieren hacer cargo. Para el sistema capitalista imperialista y las multinacionales lo primero es defender sus riquezas y ganancias, no la salud y la vida digna de miles de millones. Con el argumento de la pandemia y de las cuarentenas, o sin ellas, despiden a sus trabajadores, rebajan el salario, o directamente no pagan por la "crisis". Cuando antes del coronavirus las multinacionales, los bancos y los grandes terratenientes del mundo venían acumulando grandes ganancias. Ya es casi popular que veintiséis supermillonarios tengan la misma cantidad de dinero que 3.800 millones de las personas más pobres del mundo. Estamos hablando de multinacionales como Amazon, Microsoft, Ford, General Motors, Toyota, Siemens, Exxon Mobil, Chevron, Total, Samsung, Nestlé, JP Morgan Chase, HSBC, Alibabá, Walmart, Johnson y Johnson, Bayer-Monsanto, Pfizer, Coca-Cola, Boeing, Airbus, Facebook, Apple, Cargill, entre otras.

Además, los "salvatajes" del gobierno de Donald Trump no son para invertir en salud pública o para "salvar" el salario del pueblo trabajador norteamericano. Son para socorrer a las multinacionales yanquis. Algo semejante ocurre en la Unión Europea. Trump otorgó 455.000 millones de dólares a las grandes empresas como préstamo bancario con garantía del Estado. O sea que si no pagan pasa a ser deuda pública. Mientras, en el último mes se produjeron más de veinte millones de nuevos desempleados. Al mismo tiempo solo diez multimillonarios, incluyendo al dueño de Amazon, Jeff Bezos; el dueño de



Facebook, Mark Zuckerberg, y el dueño de Microsoft, Bill Gates, aumentaron en 51.3 billones de dólares sus riquezas.

El otro mecanismo de expropiación del imperialismo, la banca, el FMI y el Banco Mundial es el de la deuda externa. En 2020 la deuda global alcanzó un récord histórico de 253 billones de dólares. De esa forma se saquea a los pueblos del mundo. Los gobiernos agentes del imperialismo llevan décadas pagando una deuda fraudulenta mientras hoy, según datos de la misma ONU, existen 821 millones de personas que se van a dormir con hambre y que, por el crecimiento de la pobreza y el hambre, podrían morir 300.000 personas por día.

La crisis del coronavirus muestra la debacle del sistema capitalista imperialista y pone sobre el tapete la pelea por un cambio de fondo. Hay que luchar por terminar con este sistema logrando gobiernos de las y los trabajadores que inicien la construcción de una sociedad socialista sin patronos y con una planificación económica basada en las necesidades de la clase obrera y los sectores oprimidos.

En ese camino, hoy tenemos que impulsar las luchas obreras y populares para enfrentar la crisis del coronavirus. Para defender la salud y la vida de los pueblos explotados y enfrentar los ataques a las condiciones sociales por parte de los gobiernos y los grandes capitalistas.

La clase trabajadora y los sectores populares ya están saliendo a enfrentar esta realidad. Empezando por las y los trabajadores de la salud reclamando más presupuestos, salarios e insumos, siguiendo por las huelgas obreras de Italia de marzo exigiendo parar la producción. Las huelgas en empresas contra los despidos o por medidas de seguridad en los Estados Unidos, el Estado español, Grecia, Argentina, Colombia. Los saqueos por hambre en Venezuela o los cacerolazos en Brasil contra Bolsonaro y su política criminal. Los enfrentamientos en los barrios populares de París contra la represión policial. Y la sorpresiva vuelta de las movilizaciones populares en Líbano reclamando contra la continuidad del ajuste social que venían repudiando desde octubre de 2019.

Desde la UIT-CI apoyamos todas estas expresiones de lucha en cada país y llamamos a darles continuidad y unidad en un amplio movimiento internacional para que la crisis del coronavirus la paguen los capitalistas y no los trabajadores y los pueblos.

Proponemos luchar por un plan de emergencia obrero y popular en cada país e internacionalmente. En todo el mundo se necesita plata para salud, salario, trabajo y comida. La pandemia del coronavirus no ha terminado. Y también tenemos la pandemia social que quieren imponer el imperialismo, las multinacionales y sus gobiernos. Por todo ello se hace necesario luchar por el no pago de las deudas externas. Por un frente de países deudores para no pagar. Altos impuestos progresivos a las multinacionales, los bancos y los terratenientes del mundo. Para dedicar, en cada país, esos fondos para combatir el Covid-19, prohibir los despidos o las rebajas salariales, dar un seguro o salario de cuarentena al desocupado (parado) y dar comida a millones de necesitados.

También llamamos a repudiar toda forma de represión policial usando el argumento del confinamiento o cuarentena, como la militarización, y a defender el derecho a la protesta obrera y popular.

Cada día se hace más evidente que para enfrentar la actual crisis del coronavirus, como la que vendrá luego de la pandemia, se necesita avanzar en acciones unificadas a nivel internacional. En muchos países ya se está reclamando imponer impuestos progresivos a la riqueza. En África se estaría generando un bloque de países para no pagar la deuda externa. Se hizo ya una acción mundial de protesta de los trabajadores de las Apps. El FIT-Unidad de la Argentina convocó a una conferencia de lucha latinoamericana que solo está postergada por la pandemia. Otras iniciativas de lucha internacional irán surgiendo. En ese marco, desde la UIT-CI apoyamos toda forma amplia de lucha y coordinación empezando por los tres puntos señalados:

- 1) No al pago de las deudas externas.
- 2) Altos impuestos progresivos a los de arriba.
- 3) Contra toda forma de represión y por el derecho a la protesta.

Y convocamos a la más amplia unidad de acción de las organizaciones obreras y populares, del movimiento de lucha de las mujeres, de la juventud, del movimiento contra la degradación ambiental, como de la izquierda anticapitalista y socialista para coordinar un movimiento de lucha internacional.

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores • Cuarta Internacional (UIT-CI)

11 de mayo de 2020

NOTICIERO INTERNACIONAL

Brasil: defender la vida de los trabajadores de la salud

El 12 de mayo, Día de la Enfermera en Brasil, trabajadoras y trabajadores de la salud y sindicatos del sector organizaron diversas protestas. La Corriente Socialista de los Trabajadores (sección brasileña de la UIT-CI), en su editorial del boletín electrónico (<http://cstpsol.com/home>) señala que la manifestación de salud del 1° de mayo en el Distrito Federal y las protestas en San Pablo son ejemplos nacionales de lo que hay que hacer para enfrentar el coronavirus.

Las trabajadoras y trabajadores de la salud son atacados de todas las maneras posibles. Sufren los

procesos de privatización, cierres de servicios públicos, reducción del servicio de salud y la disminución de empleos estatales por el pago de deuda a los banqueros, más la ausencia de derechos laborales, en primer lugar en los hospitales privados, y en los sectores tercerizados (servicios que hacen empresas privadas) dentro de los hospitales públicos.

Bolsonaro y los gobiernos estatales y municipales, junto con los empresarios, quieren imponer una mayor flexibilización aumentando el riesgo de contaminación cuando el sistema de salud del país ya está



Brasil: defender la vida de los trabajadores de la salud....

en colapso, con más de 10.000 muertos, entre ellos una cantidad importante de trabajadoras y trabajadores de la salud.

Haciendo gala de su irresponsabilidad, ignorancia y desprecio por el pueblo, el presidente Jair Bolsonaro dijo que la pandemia es una "neurosis".

La CST llama a las centrales sindicales CUT y CTB y a las organizaciones estudiantiles a apoyar esta lucha que concierne a toda la clase trabajadora.

Estados Unidos. Se multiplican las "huelgas de inquilinos"

Los llamados a huelgas de inquilinos aumentan durante la pandemia. Muchos no pudieron pagar el alquiler de mayo por haber perdido el trabajo. "Hay que parar el pago de los alquileres durante la pandemia", dijo a la agencia EFE Evelin Urrutia, directora de Inquilinos y Trabajadores Unidos (TWU, en inglés), una organización con sede en Alexandria, Virginia. "No deberían cobrar porque la gente no trabaja, o les bajaron sus salarios", argumentó.

El 1° de mayo, Día de los Trabajadores, TWU organizó una manifestación por el barrio que los residentes, en su mayoría centroamericanos, llaman "Chirilagua", con caravanas de automóviles y vecinos con carteles que aplaudían desde sus ventanas.

El impacto económico es más grave para los hispanos, muchos de ellos trabajadores indocumentados o empleados a tiempo parcial que no pueden solicitar el subsidio por desempleo.

El costo de la vivienda, en unidades alquiladas o compradas con hipoteca, consume en promedio en los Estados Unidos el 37% de los ingresos de los hogares.

El concepto de "huelga de inquilinos" es amplio e incluye desde el reclamo de plazos extendidos o la reducción de los pagos, hasta la suspensión total del pago de alquiler y de las hipotecas. Según la plataforma WeStrikeTogether.org, desde marzo más de 190.000 inquilinos y deudores se declararon en "huelga" de pago.

"Estamos investigando cuáles son las opciones a nivel estatal y federal para impedir los desalojos masivos, porque eso es lo que se viene", dijo un dirigente comunitario, y agregó: "También estamos explorando la discusión con propietarios privados. Estamos organizando a las comunidades para que se unan y así podríamos negociar con ciertos edificios de apartamentos donde la población latina está más concentrada".



Londres, como en todo el mundo las trabajadoras y trabajadores de la salud son aplaudidos por el pueblo, pero desatendidos por el gobierno capitalista. Por eso este afiche contesta "No puedo comer aplausos. Tal vez puedan votar por alguien más sensible la próxima vez".

Estados Unidos. Más de 33 millones de despedidos

CNN informó que los Estados Unidos perdieron 20,5 millones de empleos solo en abril, cuando la crisis del coronavirus devastó el mercado laboral del país, informó este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés). Fue el mes de pérdida más grande de empleos desde que esta oficina comenzó a rastrear los datos, en 1939.

Pero el número es mucho mayor aún: durante las últimas siete semanas fueron solicitados 33,5 millones de subsidios por desempleo (esto significa nada menos que el 20% de los trabajadores formales). Estas son las cifras oficiales sobre trabajadores regulares, pero hay millones de "informales" que no figuran en las estadísticas ni tampoco tienen seguro de desempleo y que sufrieron en mayor proporción los despidos.

La tasa de desempleo aumentó a 14,7%, la más alta registrada desde que BLS comenzó su serie mensual en 1948. La última vez que el desempleo estadounidense alcanzó tal nivel de gravedad fue en la Gran Depresión. La tasa alcanzó el 24,9% en 1933, según estimaciones históricas anuales del BLS.

Es probable que se subestime el número de estadounidenses desempleados. Esto se debe a que el BLS solo considera a las personas como "desempleadas" cuando han estado sin

trabajo pero han buscado activamente uno nuevo en las cuatro semanas anteriores, o por un "despido temporal", con la expectativa de ser recontratados dentro de los seis meses siguientes.

Ecuador. Protestas estudiantiles contra la rebaja del presupuesto universitario

Una nueva jornada de protesta se vive desde las 9 de este lunes 11 de mayo de 2020 en la plaza Indoamérica. Se concentraron estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad Central del Ecuador (UCE) para rechazar el recorte de algo más de 98 millones de dólares en el presupuesto de treinta y dos universidades y escuelas politécnicas públicas.

El pasado martes 5 se realizó la primera protesta luego de que las universidades hicieran público el recorte. El Frente en Defensa de la Educación Pública convocó a este segundo "plantón" en medio de la emergencia sanitaria que vive el país por el Covid-19.

Los manifestantes tomaron medidas de bioseguridad. Un profesor universitario que asistió a la protesta señaló que su objetivo es hacer sentir "que la población no está dormida". El docente señaló que "se trata de ir disminuyendo el presupuesto del Estado a condiciones dramáticas que no se llegaron a ver ni en los '90. La idea es estar presentes para hacerle entender al gobierno, que mira la educación como algo secundario, que somos esenciales, no solo en la pandemia sino en el desarrollo de la sociedad". Además, se refirió a las condiciones en las que las universidades públicas deben empezar un período académico en modalidad virtual debido a la pandemia: "Hay una sobresaturación de las posibilidades, tanto de la plataforma universitaria como del mismo sistema de internet de la ciudad. No estamos del todo preparados para el teletrabajo, nos hace falta más apoyo pedagógico y los estudiantes también requieren educación en trabajo autónomo".

Los participantes de la protesta universitaria dijeron que temen que se supriman becas y carreras debido a la rebaja presupuestaria.

Universidades como la Central y la Espol ya han anunciado que no podrán iniciar normalmente el presente período académico debido al recorte (información diario *El Comercio*, Quito).